

2. Negociaciones de paz en África

- A lo largo del año 2025 se identificaron 19 procesos y negociaciones de paz en el continente africano, lo que supone prácticamente el 36% de los 53 procesos de paz a nivel mundial. No obstante, la mayoría de ellos evolucionaron negativamente.
- Durante el año iniciaron sendos Diálogos Nacionales en Mozambique y Sudáfrica que buscaron incorporar reformas y distender las tensiones sociales y políticas.
- La resolución de los diferentes conflictos internos y crisis regionales que afronta Etiopía se vio estancada por múltiples factores endógenos y exógenos.
- El Gobierno de Senegal y una facción del MFDC reafirmaron su compromiso con la paz en Casamance.
- Fracasó la iniciativa diplomática qatarí-estadounidense entre RDC y Rwanda mientras persistía la ofensiva del M23/Rwanda y la progresiva implicación de Burundi, lo que podría provocar una escalada regional del conflicto.
- El acuerdo de paz en Sudán del Sur quedó al borde del colapso tras la detención de exvicepresidente Riek Machar.

Este capítulo analiza los procesos y negociaciones de paz en África en 2025. En primer lugar, se examinan las características y tendencias generales de los procesos de paz en la región y, en segundo lugar, se profundiza en la evolución de cada uno de los casos durante el año, incluyendo referencias a la agenda de género, paz y seguridad. Al inicio del capítulo se incluye un mapa en el que se identifican los países del continente africano que fueron escenario de negociaciones durante 2025.

Tabla 2.1. Resumen de los procesos y las negociaciones de paz en África en 2025

Procesos y negociaciones de paz	Actores negociadores	Terceras partes
Chad¹	Los 18 grupos armados no firmantes del acuerdo de Doha –que no participaron en el DNIS– formaron el Cadre Permanent de Concertation et de Réflexion (CPCR), entre ellos el FACT y el CCSMR. Gobierno y Comité de Autodefensa de Miski	Comunidad de Sant'Egidio
Eritrea – Etiopía	Gobierno de Eritrea y Gobierno de Etiopía	Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, EEUU
Etiopía	Gobierno, partidos políticos, oposición política y social, ciudadanía	PNUD, UE, Alemania, Noruega, Berghof Foundation
Etiopía (Amhara)	Etiopía, facción de las milicias Fano (Amhara Fano Popular Organization, AFPO)	Amhara Peace Council, UA, IGAD
Etiopía (Tigré)	Gobierno Federal, autoridades político-militares de la región etíope de Tigré (Frente de Liberación Popular de Tigré)	UA, EEUU, IGAD
Etiopía – Egipto – Sudán	Etiopía, Egipto y Sudán	UA, Banco Mundial (BM), EAU, UE, EEUU
Etiopía – Somalia (Somalilandia)	Etiopía, Somalia	Türkiye, Qatar
Libia	Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN), Consejo Presidencial, Alto Consejo de Estado, Cámara de Representantes (CdR), LNA o ALAF	ONU, Cuarteto (ONU, Liga Árabe, UA, UE), Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU, Holanda, Suiza, Türkiye, Egipto, Argelia, Marruecos, Túnez (Proceso de Berlín)

1. En el caso de Chad existen dos procesos: en primer lugar, proceso de concertación de la parte de la insurgencia que no firmó el acuerdo de Doha de 2022 facilitada por la Comunidad de Sant' Egidio, y en segundo lugar, la negociación y acuerdo de paz de Miski (región de Tibesti) entre el Gobierno y el Comité de Autodefensa de Miski.

Procesos y negociaciones de paz	Actores negociadores	Terceras partes
Marruecos – Sáhara Occidental	Marruecos, Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (POLISARIO)	ONU, Argelia y Mauritania, Grupo de Amigos del Sáhara (Francia, EEUU, España, Reino Unido y Rusia)
Mozambique	Gobierno, oposición política y social	Instituto para Democracia Multipartidaria (IMD)
RCA	Gobierno, grupos armados pertenecientes a la antigua coalición Séléka, milicias antibalaka	Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación (UA y CEEAC con apoyo de la ONU, CIRGL, Angola, Gabón, Rep. del Congo y Chad), Comunidad de Sant'Egidio, ACCORD, OCI, Grupo de Apoyo Internacional (ONU, UE, entre otros), Centre for Humanitarian Dialogue, China, Rusia, Sudán
RDC	Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupo armado M23, grupos armados del este del país, oposición política y sociedad civil	UA, SADC, CIRGL, EAC, UE, ONU, OIF, EEUU, Angola, Qatar, Kenya
Senegal (Casamance)	Gobierno, facciones del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC)	CEDEAO, Center for Humanitarian Dialogue, Guinea Bissau, Cabo Verde, Coordinadora de Organismos Subregionales para la Paz en Casamance (COSPAC)
Somalia	Gobierno Federal, líderes de los estados federales y emergentes (Puntlandia, HirShabelle, Galmudug, Jubalandia, Suroeste), movimiento político-militar Ahlu Sunna Wal-Jama'a, líderes de clanes y subclanes, Somalilandia	ONU, IGAD, Türkiye, UA
Somalia – Somalilandia	Gobierno Federal de Somalia, República de Somalilandia	Türkiye, Noruega
Sudáfrica	Gobierno, oposición política y social	--
Sudán	Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y Rapid Support Forces (RSF)	Mecanismo "Quad" o Cuarteto (EEUU, Arabia Saudí, Egipto y EAU), Mecanismo trilateral (ONU, UA e IGAD (Etiopía, Sudán del Sur, Djibouti, Kenya, Uganda)), Suiza, Türkiye, UE
Sudán del Sur²	Negociaciones de implementación del Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) (2018): Gobierno (SPLM), SPLM/A-in-Opposition (SPLM/A-IO), otros grupos armados (SSOA, SPLM-FD, entre otros), facciones del SPLM-IO (facción Kitwang liderada por Simon Gatwech Dual y facción dirigida por el general Johnson Olony) Negociaciones de Roma – Nairobi (Iniciativa Tumaini): Gobierno, Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSQ) –antes SSOMA, compuesto por: National Salvation Front (NAS), South Sudan United Front (SSUF), the Real SPLM, South Sudan People's Patriotic Movement (SSPPM).	Negociaciones de implementación del Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) (2018): "IGAD Plus" (Sudán, Sudán del Sur, Kenya, Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalia y Uganda), UA (Nigeria, Rwanda, Sudáfrica, Chad y Argelia), China, Rusia, Egipto, Troika (EEUU, Reino Unido y Noruega), UE, ONU, South Sudan Council of Churches Negociaciones de Roma - Nairobi: Comunidad de Sant'Egidio, Kenya
Sudán – Sudán del Sur	Gobierno de Sudán y Gobierno de Sudán del Sur, comunidades étnicas de la región de Abyei	IGAD, Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), UNISFA, ONU

2.1 Negociaciones en 2025: tendencias regionales

A lo largo del año 2025 se registraron **19 procesos y negociaciones de paz en el continente africano**, lo que supone prácticamente el 36% de los 53 procesos de paz identificados a nivel mundial. Esta cifra es similar a la de años precedentes (20 procesos y negociaciones de paz en 2024, 18 procesos y negociaciones de paz en 2023, 15 en 2022, 12 en 2021, 13 en 2020, 19 en 2019), aunque está por debajo de la registrada en 2018 (22). Once negociaciones se ubicaron en el Cuerno de África –Eritrea-Etiopía, Etiopía, Etiopía (Amhara), Etiopía (Tigré), Etiopía-Egipto-Sudán, Etiopía-Somalia (Somalilandia), Somalia, Somalia-Somalilandia, Sudán,

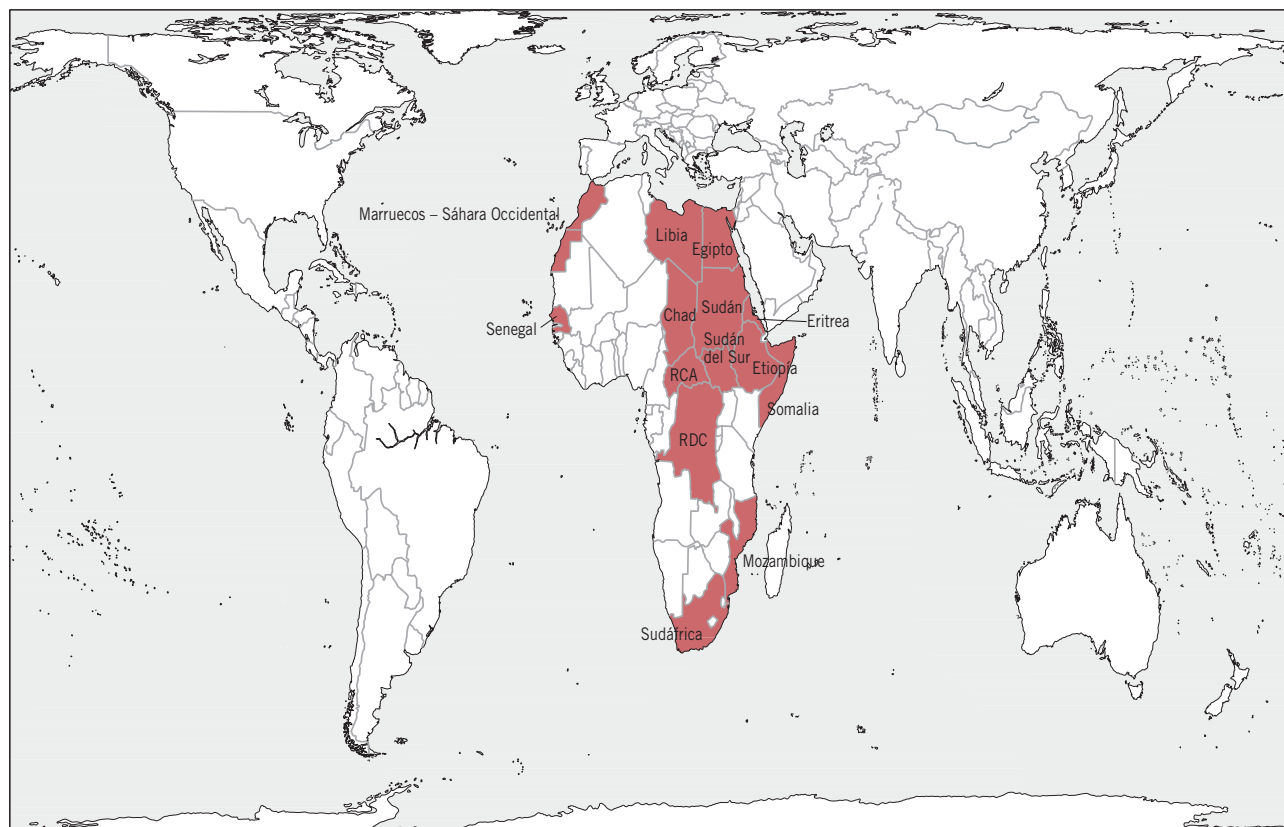
Sudán del Sur y Sudán-Sudán del Sur–, tres en África Central –Chad, RCA y RDC–, una en África Occidental –Senegal (Casamance)–, dos en el Norte de África –Libia y Marruecos-Sáhara Occidental–, y las dos restantes en el sur de África –Mozambique y Sudáfrica.

Tres casos dejaron de ser analizados en 2025 respecto a 2024 como consecuencia de la ausencia de contactos y negociaciones durante el año: Malí, Camerún y la región etíope de Oromiya.³ En primer lugar, en **Malí, no se reactivó el Acuerdo para la Paz y la Reconciliación de 2015** (conocido como el Acuerdo de Argel) desde

2. Dentro de este proceso de negociación de paz se incluyen dos espacios diferentes: 1) Negociaciones sobre la implementación del Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) (2018); y 2) Negociaciones de paz entre el Gobierno y los grupos armados no signatarios del R-ARCSS en Roma – Nairobi. En la columna de actores se especifica quienes participan en cada uno de ellos.

3. Véase Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2025.

Mapa 2.1. Negociaciones de paz en 2025 en África



■ Países con procesos y las negociaciones de paz en África en 2025

su suspensión a principios de 2024 por parte de la Junta Militar, tras el reinicio de los enfrentamientos armados a finales de 2023 entre las Fuerzas Armadas malienses –apoyadas por los paramilitares del Grupo Wagner– con los grupos armados árabe-tuareg signatarios del acuerdo. Además, en el norte de Malí no se produjo ningún tipo de negociación con los movimientos armados de esa región; por el contrario, se produjo un deterioro de la situación de seguridad. En segundo lugar, en **Camerún tampoco se registraron avances hacia la reapertura de un proceso de negociación entre el Gobierno de Camerún y los movimientos políticomilitares separatistas de las regiones anglófonas del Noroeste y Suroeste** –desde la finalización de la conocida como vía Suiza (2019-2022) y de la facilitación de Canadá (2022-2023). El Ejecutivo camerunés mantuvo su enfoque centrado en la respuesta securitaria y en la aplicación limitada de medidas de descentralización, sin retomar contactos exploratorios similares a los impulsados entre 2022 y 2023. Además, el contexto político estuvo marcado por la tensión derivada de la celebración de elecciones presidenciales en octubre de 2025, que convirtieron a Paul Biya en el jefe de Estado más longevo del mundo, en el poder desde 1982. En tercer lugar, la **región etíope de Oromiya** continuó inmersa en un clima de conflicto y violencia, marcado por la **ausencia de negociaciones**

entre el Gobierno federal y el Ejército de Liberación Oromo (Oromo Liberation Army, OLA). El año estuvo dominado por operaciones de contrainsurgencia, violencia irregular y conflictos intercomunitarios, y no se relanzó un proceso formal de diálogo comparable a los contactos exploratorios celebrados en Tanzania en 2023. No existió una iniciativa de paz estructurada, ni mediada por terceros, que involucrase al conjunto del OLA. En su lugar, el Gobierno federal optó por una **estrategia dual de presión militar y cooptación selectiva**, destinada a explotar divisiones internas dentro de la insurgencia. En este sentido, en diciembre de 2025 las autoridades etíopes anunciaron la **rendición de más de 200 combatientes armados del OLA en la zona de East Wollega, tras negociaciones con autoridades regionales y federales**. Este acontecimiento fue presentado como un éxito de la estrategia gubernamental de combinar presión militar con incentivos al diálogo.⁴ Por otra parte, un cuarto caso dejó de ser analizado por **la finalización de la implementación formal del acuerdo de paz de 2019 en Mozambique**, en relación al conflicto armado con la Renamo. En junio de 2023 se completó formalmente el proceso con el desarme y la desmovilización del último grupo de excombatientes y se procedió al cierre de la última base militar y su cuartel general en Vunduzi, provincia de Sofala. No obstante, algunos aspectos del acuerdo de paz –como

4. Kedir, Sadik, *Ethiopian army says over 200 armed fighters surrender in western Oromia*, Anadolu, 21 de diciembre de 2025.

el proceso de descentralización y las iniciativas de reconciliación nacional– siguieron pendientes, como puso de manifiesto el conflicto postelectoral de 2024 y las iniciativas de diálogo y negociación derivadas de este, que se analizan en el capítulo.

Siete de estas 19 negociaciones de paz estaban vinculadas a situaciones de conflicto armado: los casos de Etiopía (Amhara), Libia, RCA, RDC, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Los otros 12 procesos tuvieron lugar en contextos de tensión sociopolítica, que en algunos casos también habían padecido episodios de enfrentamiento bélico en el pasado reciente: Chad, Eritrea-Etiopía, Etiopía, Etiopía (Tigré), Etiopía-Egipto-Sudán, Etiopía-Somalia (Somalilandia), Marruecos-Sáhara Occidental, Mozambique, Senegal (Casamance), Somalia-Somalilandia, Sudáfrica y Sudán-Sudán del Sur. Algunos de los procesos de paz identificados correspondían a conflictos iniciados en la última década –Sudán (2023)–, otros se remontan a las dos décadas anteriores –la región sudanesa de Darfur (2003 –actualmente analizado dentro del conflicto de Sudán), RCA (2006), Sudán del Sur (2009), Libia (2011) y Sudán-Sudán del Sur (2011)– mientras que otros conflictos y situaciones de tensión se remontan a los años noventa del siglo XX –como los casos de RDC y Somalia–, o todavía más allá –como es el caso de Etiopía y Somalia, países enfrentados históricamente y a la vez inevitablemente unidos por numerosos factores– por lo que las iniciativas y negociaciones de paz vinculadas a estos conflictos han evolucionado profundamente desde su origen en lo concerniente a los actores implicados y las causas de las disputas.

El proceso de paz analizado más longevo del continente y que padece una parálisis estructural es el que enfrenta a Marruecos y el Sáhara Occidental, iniciado a partir del acuerdo de cese el fuego de 1991. A su vez, desde la caída de Siad Barre en Somalia en 1991 y la autoproclamación de Somalilandia como república independiente ese mismo año –no reconocida por la comunidad internacional– se han sucedido, sin éxito, diferentes iniciativas para promover la reconciliación entre ambas entidades y la reintegración de Somalilandia en el seno de Somalia. Estos casos ponen de manifiesto que las heridas abiertas durante el periodo colonial y postcolonial han seguido determinando el presente y el futuro de estos contextos.

En relación con **los actores participantes en las negociaciones**, solo cuatro casos involucran exclusivamente a gobiernos de los respectivos países y grupos armados o movimientos político-militares en las negociaciones. Son los dos contextos de Etiopía –la implementación del acuerdo entre el Gobierno federal etíope y las autoridades político-militares de la región

de Tigré, así como el acuerdo entre el Gobierno federal etíope y una de las facciones de las milicias Fano en la región de Amhara–, RCA –entre el Gobierno y los grupos armados que no abandonaron el proceso de paz en diciembre de 2020, así como los grupos que abandonaron el proceso en 2020 y que se han ido sumando durante los últimos años– y Senegal –entre el Gobierno y una facción del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC).

En paralelo, cinco de los otros 19 procesos de paz se caracterizaron por un mapa de actores más complejo, con Gobiernos, grupos armados y actores opositores políticos y sociales. Se constató así en Libia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y RDC. A su vez, otros procesos negociadores han estado protagonizados por los gobiernos de países vecinos u organismos regionales, en el marco de disputas interestatales, como por ejemplo los casos de Sudán y Sudán del Sur, Eritrea y Etiopía, Etiopía y Somalia y las conversaciones entre Etiopía, Egipto y Sudán, en lo relativo a la gestión de las aguas del río Nilo. Por otra parte, cabe destacar la creciente existencia de procesos de diálogo nacional entre actores políticos y sociales en diferentes países, como es el caso de Etiopía, Mozambique y Sudáfrica.

Finalizó la implementación formal del acuerdo de paz de 2019 en Mozambique, pero algunos aspectos siguieron pendientes, como puso de manifiesto el conflicto postelectoral de 2024

En relación con **las terceras partes implicadas en los procesos de paz** en África, todos los procesos y negociaciones analizados contaban con la presencia y el apoyo de terceras partes, ya sea organizaciones internacionales, organizaciones regionales, Estados y organizaciones religiosas o especializadas en mediación y facilitación, exceptuando el diálogo nacional en Sudáfrica. En estos procesos y negociaciones había más de un actor desempeñando tareas de mediación y facilitación, entre los que destaca el papel predominante de la ONU y de la UA.

Los Estados también continuaron teniendo un papel destacado como terceras partes en los procesos de paz y negociaciones en África. En la mayoría de los procesos de paz analizados hubo la participación de Estados liderando o apoyando iniciativas de diálogo y negociación. Cabe destacar, en 2025, el papel de Türkiye en las negociaciones de paz entre Etiopía y Somalia, o el rol desempeñado por Arabia Saudita, EEUU, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Suiza, entre otros Estados, en el proceso negociador entre el Ejército sudanés y las RSF, o el papel de Arabia Saudita en el contencioso entre Eritrea y Etiopía. También destaca el papel desempeñado por organizaciones especializadas en mediación y facilitación, en especial el Centro para el Diálogo Humanitario, presente en contextos como Etiopía, Libia, RCA, Senegal en los últimos años, o la Comunidad de Sant'Egidio, en presente en Chad, RCA y Sudán del Sur, y en años anteriores, en Mozambique.

En el marco de esa proliferación de actores mediadores, **siguió siendo frecuente, como en los últimos años, la participación de terceras partes en el marco de formatos conjuntos**, como los llamados grupos de amigos y grupos de apoyo. Fue el caso, entre otros, de la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación (que incluye la UA, CEEAC, con apoyo de la ONU, la CIRGL, Angola, Gabón, Rep. del Congo y Chad) en el caso de RCA; la IGAD Plus, que facilita el diálogo en Sudán del Sur y que está integrada por la IGAD, los cinco miembros del High-level Ad Hoc Committee de la UA (Nigeria, Rwanda, Sudáfrica, Chad y Argelia). En el caso de Sudán, el estallido en 2023 de un nuevo conflicto armado afectó negativamente a los avances logrados gracias al doble proceso mediador existente hasta la fecha: el mecanismo trilateral (conformado por la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS), la UA y la IGAD) y el conocido como Quad (que incluye a EEUU, Reino Unido, Arabia Saudita y EAU), y que se unificó en el llamado Grupo Alineado para el Avance de la Vida y la Paz en Sudán (ALPS).

Respecto a **las agendas** de las negociaciones, los **ceses de hostilidades y acuerdos de alto el fuego** siguieron estando presentes en diversos contextos, como en Libia, en las regiones etíopes de Amhara y Tigré, Senegal (Casamance), Sudán o en RDC, en relación al conjunto de grupos armados del este del país y en especial del M23. También fue recurrente el ámbito de la **reforma del sector de la seguridad**, y en especial los procesos de desarme, la desmovilización y la reintegración de combatientes (DDR) y la reforma o creación de nuevos cuerpos de seguridad post acuerdos de paz –con tipologías y nombres diversos como unidades mixtas, fuerzas conjuntas o ejércitos nacionales unificados– estuvo presente en la mayoría de contextos analizados, como Chad, Etiopía (Tigré), RCA, RDC, Senegal (Casamance), Sudán, Sudán del Sur y Libia. En muchos de estos contextos, las **amnistías e indultos** por los crímenes cometidos por parte de los grupos armados y los cuerpos de seguridad durante los conflictos formaban parte de los procesos de negociación y los acuerdos alcanzados. Cuestiones vinculadas a la **gobernanza** también estuvieron presentes en las negociaciones en marcha en diversos contextos, como Chad, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Libia. Temas relativos al **grado de autogobierno y al grado de descentralización administrativa, incluyendo la independencia** de los territorios estuvieron presentes en Etiopía, Etiopía (Tigré), Senegal (Casamance), Sudán del Sur, y Marruecos-Sáhara Occidental. El proceso entre Somalia y Somalilandia, aunque particular, formaría parte de este grupo. Por último, en lo concerniente a la **gestión de los recursos y del territorio**, las demarcaciones fronterizas inconclusas, como en los contenciosos entre Eritrea y Etiopía y entre Sudán y Sudán del Sur fue otro de los ámbitos de negociación presentes en el continente africano, así como las

disputas entre Etiopía y Somalia y entre Somalia y Somalilandia, y el contencioso en torno a la gestión de las aguas del río Nilo entre Etiopía, Egipto y Sudán.

Respecto a la evolución de las negociaciones de paz durante 2025, cabe destacar el desarrollo negativo y la ausencia de diálogo en la mayoría de procesos de paz del continente africano. La única iniciativa que tuvo una evolución positiva durante el año tuvo lugar en Senegal, donde el Gobierno y una facción del Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC por sus siglas en francés) reafirmaron su compromiso con la paz en la región de Casamance. En febrero, las partes, bajo los auspicios de Guinea-Bissau, garante del proceso, y con la facilitación del Centro para el Diálogo Humanitario, celebraron una reunión en la que renovaron su compromiso con el desarme, acordaron un indulto presidencial para los rebeldes encarcelados, amnistía para los combatientes y un programa de reintegración. Cabe señalar, no obstante, que este compromiso solo involucra a una facción del grupo rebelde, menos poderosa que las otras dos, y excluye a la facción más radical liderada por Salif Sadio.

Algunos casos registraron avances, aunque persistían grandes retos y dificultades, como fueron la firma de algunos acuerdos de paz con facciones de insurgencias en la región etíope de Amhara y en Chad, aunque el panorama general en ambos contextos fue de estancamiento, parálisis y la persistencia de la violencia y la inestabilidad. También cabe destacar los retos abiertos y dificultades de los procesos de diálogo nacional en Etiopía, Sudáfrica y Mozambique. En Etiopía, el proceso de diálogo nacional no experimentó avances sustantivos y permaneció en una situación de estancamiento prolongado, pese a la continuidad formal de la Comisión de Diálogo Nacional de Etiopía (ENDC). El diálogo nacional permaneció marginado frente a una agenda dominada por respuestas securitarias, conflictos armados activos y una profunda polarización política. Sin embargo, al inicio de 2025 el diálogo ya arrastraba limitaciones estructurales: desconfianza profunda entre actores, exclusión de grupos armados clave, ausencia de condiciones mínimas de seguridad y una percepción extendida de falta de independencia política. En Mozambique, en marzo el Gobierno y los líderes de los partidos opositores con representación en el Parlamento acordaron poner en marcha un proceso de reforma constitucional vía apertura de un Diálogo Nacional. No obstante, la configuración y formato de la Comisión Nacional de Diálogo y Reforma, espacio que implementa el proceso de diálogo, se convirtió en el principal foco de controversia, debido a la falta de transparencia en la selección de los representantes de la sociedad civil (tres de sus 21 miembros) y, segundo, a causa de la exclusión de la figura central de la oposición, Venâncio Mondlane. Este último había impulsado la principal fuerza política (PODEMOS) de las protestas ciudadanas, pero debido a su abandono posterior del partido, no tenía representación parlamentaria en el

momento de conformar la Comisión y no fue incluido. Aun y estando excluido por el momento, el nuevo partido creado por Mondlane, ANAMOLA, presentó propuestas a la Comisión Técnica, incluyendo la revisión de la Constitución y el órgano electoral, así como su inclusión formal en el mismo. En **Sudáfrica**, el Gobierno puso en marcha un proceso de Dialogo Nacional para buscar soluciones colectivas a la crisis social, política, económica y de seguridad que padece el país. No obstante, ausencias significativas, como la de la Alianza Democrática –el segundo partido más grande en el gobierno unificado– y críticas que acusaron a la ANC de intentar controlar el Diálogo y usarlo como plataforma de campaña de cara a las elecciones locales de 2026, debilitaron el proceso. Por último, aunque la

República Democrática del Congo (RDC)

atravesó uno de los años más críticos de la última década –con la intensificación del conflicto armado en el este– se produjeron avances diplomáticos destacados en el plano interestatal, con la firma de los **acuerdos de paz de junio y de diciembre entre RDC y Rwanda**, pero estos no se tradujeron en una reducción sostenida de la violencia, consolidándose una brecha profunda entre los compromisos diplomáticos y la realidad sobre el terreno, debido a la falta de inclusión del M23 en los acuerdos interestatales y el nulo compromiso en la implementación de estos acuerdos. En conjunto, **2025 confirmó el agotamiento de los marcos africanos de mediación (Luanda y Nairobi)** y el desplazamiento del centro de gravedad diplomático hacia terceras partes no africanas, especialmente Qatar y EEUU. Además, la centralidad en los acuerdos de los intereses económicos ligados a los minerales y la persistencia de causas estructurales –gobernanza débil, militarización del territorio y fragmentación armada– limitaron severamente las perspectivas de un proceso de paz creíble.

En el resto de las iniciativas de diálogo y negociación –Eritrea-Etiopía, Etiopía (Tigré), Etiopía-Egipto-Sudán, Etiopía-Somalia, Libia, Marruecos-Sáhara Occidental, RCA, Somalia, Somalia-Somalilandia, Sudán, Sudán del Sur y Sudán-Sudán del Sur– no se produjeron avances y, por el contrario, dichos procesos se vieron marcados por el estancamiento y bloqueo, y en algunos casos, se situaron al borde de la ruptura. En este sentido, cabe destacar las interrelaciones entre diferentes dinámicas de negociación en el continente y la manera en que la evolución negativa de algunos procesos condicionó o influyó en la marcha de otros. La grave crisis entre Eritrea y Etiopía influyó negativamente en la implementación del acuerdo de paz de 2022 en la región etíope de Tigré, proceso que se situó al borde de la ruptura. Así, en el caso de **Eritrea-Etiopía**, la

Cabe destacar el desarrollo negativo, el estancamiento, bloqueo y, en definitiva, la ausencia de diálogo en la mayoría de procesos de paz del continente africano durante 2025

parálisis que afecta el proceso de negociación iniciado en 2018 entre Eritrea y Etiopía alcanzó su momento de mayor deterioro, lo que desencadenó iniciativas de diversos países para promover la reactivación del diálogo entre las partes, principalmente de Arabia Saudita y de EEUU. Riad inició un nuevo proceso de mediación entre ambos países para evitar una nueva conflagración bélica. El proceso de paz en la **región etíope de Tigré** **atravesó su momento de mayor fragilidad** desde la firma del Acuerdo de Pretoria en noviembre de 2022. El año estuvo marcado por una combinación de implementación incompleta del acuerdo, creciente fragmentación política y militar interna en Tigré, y un deterioro de las relaciones entre Mekelle y Addis Abeba. Desde el punto de vista formal, el Acuerdo de Pretoria

siguió siendo el marco de referencia pero algunas de las cuestiones estructurales más sensibles quedaron sin implementar: la disputa territorial sobre Tigré Occidental, el retorno de las personas desplazadas, la retirada completa de fuerzas no federales, la justicia transicional y la reintegración política plena del TPLF. Además, la rivalidad entre el entonces presidente de la Administración Regional Interina de la región de Tigré, Getachew Reda (nombrado por el Gobierno federal), y el liderazgo del TPLF encabezado por Debretsion

Gebremichael culminó en la destitución de Reda en abril y su sustitución por el teniente general Tadesse Werede (comandante de las fuerzas de Tigré y figura clave), sustitución validada por el Gobierno federal. A finales de año la tensión entre Mekelle y Addis Abeba se situó al borde la ruptura del acuerdo y el reinicio de las hostilidades. En paralelo, en relación al conflicto entre **Egipto y Sudán con Etiopía**, en torno a la gestión del río Nilo y, en particular, a la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), persistió la **confrontación diplomática y el estancamiento negociador** sin que se produjera un relanzamiento del proceso de diálogo tripartito, y el año se vio marcado por acciones unilaterales y una creciente internacionalización del contencioso.

Respecto a la tensión diplomática entre **Etiopía y Somalia**, la firma el 11 de diciembre de 2024 de la denominada Declaración de Ankara,⁵ mediada por Türkiye, puso fin a la grave crisis provocada por el memorando de entendimiento firmado previamente entre Etiopía y la región secesionista de Somalilandia a inicios de 2024. No obstante, aunque durante la primera parte del año se celebraron algunas reuniones técnicas, a mediados de año diferentes análisis señalaron que el proceso se encontraba estancado a pesar de los esfuerzos de Türkiye para relanzar el dialogo. En paralelo, la crisis entre **Somalia y Somalilandia** a raíz del citado memorando de entendimiento entre Etiopía y Somalilandia siguió abierta y el diálogo permaneció

5. República de Türkiye – Ministerio de Exteriores, *Ankara Declaration by the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Federal Republic of Somalia facilitated by the Republic of Türkiye*, 11 de diciembre de 2024.

totalmente interrumpido; el acuerdo de Ankara, que no contó con la participación de Somalilandia, ahondó en la fractura entre Somalia y Somalilandia. En **Somalia** se anunció la creación de una **plataforma de diálogo nacional inclusivo**, concebida para alinear a líderes políticos, clanes y sociedad civil frente a al-Shabaab y reforzar la cohesión interna del Estado. Esta propuesta recibió el respaldo explícito de socios internacionales –incluidos la ONU, la UE y EEUU–, que la consideraron un complemento necesario a la presión militar. No obstante, la iniciativa no se tradujo en un proceso sostenido ni incorporó a actores armados insurgentes, limitando su impacto. Además, persistió la ausencia de diálogo en relación con al-Shabaab y las tensiones en torno al modelo electoral, en el que parte de la oposición y varios estados federados –especialmente Puntlandia y Jubalandia– vieron un intento unilateral de recentralizar el poder por parte del presidente Mohamud, lo que generó fuertes tensiones e incluso enfrentamientos esporádicos en Jubalandia entre el Gobierno federal y las autoridades regionales.

Respecto a las negociaciones en el norte de África, en **Libia**, persistió la fractura política e institucional en paralelo a hechos de violencia que – pese a ser de baja intensidad desde el alto el fuego de 2020– subrayaron la fragilidad de la situación y los retos a la hora de abordar el conflicto político y armado. Las diversas iniciativas impulsadas principalmente por la ONU durante 2025 no consiguieron desbloquear el proceso libio, pese a la creciente frustración de la población con el statu quo. En lo concerniente al diálogo entre **Marruecos y el Frente POLISARIO** de cara a intentar reactivar las negociaciones sobre el Sáhara Occidental, el mismo siguió bloqueado, y la principal novedad del periodo fue el apoyo internacional más contundente a las tesis marroquíes, que se materializó en el respaldo de diversos países y en la aprobación de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU que, en octubre, reconoció expresamente el plan de autonomía de Rabat como base para las negociaciones para abordar el contencioso.

En África Central, la **República Centroafricana (RCA)** siguió viviendo una situación de violencia crónica y proceso de paz estancado. El Gobierno mantuvo un discurso oficial de compromiso con la paz, aunque en la práctica priorizó una estrategia de control militar y centralización autoritaria, apoyada en alianzas de seguridad externas. Los avances puntuales en DDR y la reincorporación de algunos grupos armados al acuerdo de paz coexistieron con la fragmentación insurgente, la debilidad de la justicia transicional y la priorización del control coercitivo frente a la reconciliación. **En Sudán, las iniciativas de paz volvieron a ser infructuosas y no lograron contener la violencia en el país durante un año caracterizado por la división de facto del país en**

dos áreas de influencia. Por un lado, el Ejército (SAF por sus siglas en inglés), tras la recuperación de la capital Jartum en marzo –que había estado en manos de las paramilitares RSF desde el inicio del conflicto– controla el centro, norte y este del país; y por otro, las paramilitares fuerzas de las Rapid Support Forces (RSF por sus siglas en inglés), controlan el sur y el oeste del país tras la toma de El Fasher, capital de Darfur y último bastión del Ejército en el oeste en octubre. Esta división fue acrecentada con la conformación de dos gobiernos paralelos: uno encabezado por el Ejército –internacionalmente reconocido y con sede en Puerto Sudán–, y otro por las RSF, que ha establecido un gobierno paralelo en Nyala, Darfur Sur.⁶ En este escenario, las iniciativas de paz no lograron avanzar durante el año. En la vecina **Sudán del Sur, la grave crisis política y militar que afectó al país amenazó con colapsar definitivamente el frágil Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur (R-ARCSS)**. El acuerdo, que establece un gobierno de transición de unidad nacional basado en el reparto del poder entre el presidente Salva Kiir (SPLM) y el primer vicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), había logrado mantener una relativa estabilidad desde su firma, pero en 2025 el frágil equilibrio se rompió. La crisis cristalizó en torno a tres dinámicas convergentes: las remodelaciones unilaterales de gobierno por parte de Kiir, la violencia armada en el estado de Alto Nilo y, como consecuencia directa, la detención de Machar en marzo.

Respecto a la **agenda de género, paz y seguridad en los procesos en el continente africano**, estos continuaron caracterizándose por importantes déficits en términos de género, la ausencia de la participación de mujeres en los equipos negociadores, así como de arquitecturas que integraran la perspectiva de género en dichos procesos. Cabe destacar, no obstante, el papel de la sociedad civil, en especial de las organizaciones de mujeres, así como los esfuerzos realizados por ONU Mujeres y otras agencias y misiones de la ONU en el terreno para intentar revertir esta situación. Estos grupos siguieron activos en la promoción de la agenda de mujeres, paz y seguridad en los diferentes contextos, en la demanda de presencia de mujeres en los espacios de negociación, así como en la exigencia de un diálogo inclusivo entre las partes enfrentadas. Del conjunto de procesos, cabe destacar algunas iniciativas, entre otras, las que se desarrollaron en **Libia, Mozambique, Somalia y Sudáfrica, en lo relativo a la participación de mujeres en equipos negociadores y espacios de consultas y apoyo a los procesos de negociación**. En Libia, las mujeres alcanzaron una representación del 35% en las iniciativas impulsadas durante el año por la ONU –el Comité Asesor y el Diálogo Estructurado, concebidos como espacios de asesoramiento y consultas para intentar contribuir al desbloqueo de las negociaciones de paz en el país. En el caso del Diálogo Estructurado,

6. Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2026! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2026.

las 40 mujeres participantes de los 120 integrantes decidieron organizarse en un grupo que denominaron Libyan Women Caucus con la intención de asegurar que las perspectivas, prioridades y demandas de las mujeres fueran incorporadas de manera sustantiva. En **Mozambique**, cabe destacar la capacitación de 240 mujeres en el marco del proyecto “Centinelas de la Paz” de la iniciativa Mujeres, Paz y Seguridad (MPS), implementada por ONU Mujeres y sus socios, con el apoyo financiero del Gobierno de Noruega.⁷ Las “Centinelas de Paz” son mujeres voluntarias que actúan como mediadoras, líderes comunitarias y defensoras de los derechos humanos en sus propias comunidades. Su labor es fundamental en zonas afectadas por conflictos armados (como Cabo Delgado) y desastres climáticos. En **Somalia**, agencias de la ONU y socios internacionales apoyaron consultas inclusivas en Mogadiscio y en varios estados federados para incorporar a mujeres líderes – entre otras, Ubax Ugaas (en el estado de Galmudug) y Hamdi Adani Amin (en el estado de Hirshabelle), que forman parte de la Somali Women Peace Network–, organizaciones de la sociedad civil –como Bilan Media– y minorías en los debates sobre el modelo electoral y la reforma constitucional, si bien estas iniciativas se vieron limitadas por el boicot de algunos actores regionales y por la inseguridad. A nivel local, se consolidaron **redes de mujeres mediadoras y constructoras de paz** – principalmente, la Somali Women Peace Network–, que facilitaron la resolución de conflictos comunitarios y el acompañamiento a víctimas de violencia de género en alrededor de 17 distritos del país. Por último, en el caso de **Sudáfrica**, el Departamento de Desarrollo Social se comprometió a garantizar la representación equitativa de las mujeres en todas las estructuras que apoyan y guían el Diálogo Nacional, incorporando la movilización de mujeres jóvenes y mayores, mujeres habitantes de zonas urbanas y rurales, mujeres de diferentes comunidades étnicas y lingüísticas, mujeres con discapacidad e incluyendo diversidad sexual LGBTQ+.

2.2. Análisis de casos

África Austral

Mozambique	
Actores negociadores	Gobierno, oposición política y social
Terceras partes	Instituto para Democracia Multipartidaria (IMD)
Acuerdos relevantes	Ley de Compromiso Político para un Diálogo Nacional Inclusivo (2025)

Síntesis:

El golpe de Estado contra la dictadura portuguesa en 1974 y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la insurgencia de origen marxista-leninista Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) condujeron a Mozambique a la independencia de Portugal en 1975. Desde entonces, Mozambique se vio afectado por una guerra civil que enfrentó al Gobierno de FRELIMO contra el grupo armado Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), apoyado por las minorías blancas gobernantes en la antigua Rhodesia (hoy Zimbabue) y la Sudáfrica del apartheid, en el contexto de la Guerra Fría. En 1992 las partes alcanzaron un acuerdo de paz, visto como un ejemplo de reconciliación, mediado por la Comunidad de Sant'Egidio, que puso fin a 16 años de una guerra que causó un millón de víctimas mortales y cinco millones de desplazados. El acuerdo dio paso a una etapa de estabilidad política y desarrollo económico, aunque con elevados niveles de desigualdad. En abril de 2013 resurgieron los enfrentamientos armados con RENAMO en el centro del país, firmándose un nuevo acuerdo de paz en agosto de 2019. Asimismo, a finales de 2017 surgió un nuevo conflicto armado en la provincia norteña de Cabo Delgado, que se mantiene en la actualidad. En paralelo, las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, han ido acompañadas de un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como de la apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte de FRELIMO. Tras las controvertidas elecciones generales de octubre de 2024, que resultaron en la victoria oficial de Daniel Chapo del partido gobernante FRELIMO, pero que estuvieron plagadas de acusaciones de fraude y una represión violenta que dejó cientos de muertos y miles de personas heridas y detenidas, el país ha intentado canalizar el descontento a través de la creación del llamado Diálogo Nacional Inclusivo.

Durante el año dio inicio el proceso del Diálogo Nacional Inclusivo que buscaba una profunda reforma constitucional tras la crisis política social que sufrió el país a raíz de las elecciones generales de octubre de 2024. El año se inició con la asunción de Daniel Chapo como presidente de la República, poniendo fin a la convulsa etapa electoral que dejó a finales de 2024 un saldo trágico de cientos de personas muertas y miles de detenidas, así como una nueva ruptura de la confianza entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. Chapo se presentó con un discurso de renovación, comprometiéndose a poner en marcha un proceso de reformas para estabilizar el país, enfrentándose al reto de mediar entre las demandas de apertura de

7. UN Women Africa, “Local Women Lead Peacebuilding and Recovery Efforts in Mozambique”, 7 de julio de 2025.

la sociedad civil y las presiones de los sectores más duros de su propio partido, el FRELIMO, que se han mostrado reacios a ceder cuotas de poder o a permitir una rendición de cuentas real por la violencia ejercida durante las protestas.

En el mes de marzo, el Gobierno y los líderes de los partidos opositores con representación en el Parlamento acordaron poner en marcha un proceso de reforma constitucional vía apertura de un diálogo nacional. Un mes después, el Parlamento aprobó por unanimidad la Ley de Compromiso Político para un Diálogo Nacional Inclusivo centrado en la reforma del Estado, la justicia y los sistemas electorales.⁸ Este instrumento legal busca establecer una hoja de ruta para la paz social mediante tres pilares fundamentales: a) creación de una Comisión Nacional de Diálogo y Reforma; b) revisión de la Constitución para adaptar el sistema político a las nuevas realidades y demandas de descentralización y transparencia; y c) medidas de transparencia y rendición de cuentas que buscan investigar los abusos cometidos y dar respuesta a las víctimas.

La citada Comisión supervisará el trabajo de 10 subgrupos temáticos, formados por los partidos políticos y por miembros de las diferentes instituciones del Estado, focalizados en torno a diferentes temas, entre ellos, la reforma de la Constitución, la fiscal, la del sistema político y la promoción de la reconciliación. Las decisiones de los subgrupos temáticos serán revisadas por la Comisión y posteriormente serán presentadas en la Asamblea Nacional y al Ejecutivo del país. A pesar del avance, el formato de la Comisión se convirtió rápidamente en el principal foco de controversia. La ley estipuló que estaría compuesta por 21 miembros –18 provenientes de los partidos políticos con representación parlamentaria o municipal (dos por partido)– y tres miembros representantes de la sociedad civil. Sin embargo, la composición fue duramente criticada, primero, debido a la falta de transparencia en la selección de los representantes de la sociedad civil y, segundo, a causa de la exclusión de la figura central de la oposición, Venâncio Mondlane. Este último había impulsado la principal fuerza política (PODEMOS) de las protestas ciudadanas, pero debido a su abandono posterior del partido, no tenía representación parlamentaria en el momento de conformar la Comisión y no fue incluido. De este modo, el 10 de septiembre se inició formalmente el llamado proceso de Diálogo

En septiembre inició el Diálogo Nacional Inclusivo en Mozambique

Nacional Inclusivo en el país, que, en principio, tiene previsto extenderse hasta noviembre de 2026.⁹ El registro podría permitir la eventual participación de ANAMOLA y, por consiguiente, de Mondlane, en las propuestas de reforma. Aun y estando excluido por el momento, ANAMOLA presentó propuestas a la Comisión Técnica, incluyendo la revisión de la Constitución y el órgano electoral, así como su inclusión formal en el mismo.¹⁰

Por otro lado, si bien los diferentes ejecutivos mozambiqueños se habían negado a entablar conversaciones de paz con la insurgencia la provincia norteña de Cabo Delgado, en septiembre el presidente Chapo y otros funcionarios hablaron por primera vez de un posible diálogo que complementa los esfuerzos militares para resolver el conflicto. En esa misma línea, Valige Tauabo, gobernador de Cabo Delgado, fue más allá e invitó a la insurgencia yihadista a expresar sus quejas a través del proceso de Diálogo Nacional, que incluye consultas a nivel nacional con representantes de la sociedad civil. También el exmandatario Armando Guebuza ha insistido en que el espíritu del diálogo nacional debe extenderse a la insurgencia del norte para lograr una paz territorial completa.¹¹

Género, paz y seguridad

Como parte del 25º aniversario de resolución 1325, ONU Mujeres, en colaboración con el Gobierno de Mozambique y la financiación de Noruega, en octubre lanzó oficialmente el proyecto “Ella lidera la paz: Fortalecimiento de la participación significativa y el liderazgo de las mujeres y las niñas en la paz, la seguridad y la recuperación (2025-2027)”, iniciativa que busca fortalecer el liderazgo y la participación de mujeres y niñas en los procesos de paz, seguridad y recuperación en 14 distritos de las provincias de Cabo Delgado, Nampula, Manica y Sofala.¹² Anteriormente, en julio, ONU Mujeres informó que 240 mujeres del proyecto “Centinelas de la Paz” recibieron capacitación en el marco del proyecto Mujeres, Paz y Seguridad (MPS), implementado por ONU Mujeres y sus socios, con el apoyo financiero del Gobierno de Noruega.¹³ Por otro lado, ONU Mujeres Mozambique informó que el 11 de noviembre se llevó a cabo un seminario web con mujeres representantes del sistema de justicia y de la sociedad civil para promover un diálogo inclusivo y urgente sobre cómo lograr un sistema de justicia más

8. Ley de Compromiso Político para un Diálogo Nacional Inclusivo, 2 de abril de 2025. Publicado en el Boletim da República, 11 de abril de 2025.
9. Alberto Massango, “ANAMOLA officially launched”, Agência de Informação de Moçambique, 22 de septiembre de 2025.
10. ANAMOLA, “As Propostas do Partido ANAMOLA para a Reforma Constitucional e Eleitoral em Moçambique”, 25 de noviembre de 2025.
11. DW África, “Cabo Delgado: Insurgentes convidados ao diálogo político”, DW, 10 de octubre de 2025.
12. ONU Mulheres Moçambique, 30 de octubre de 2025. Post red social Facebook: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1231758012328311&set=a.555566466614139>
13. UN Women Africa, “Local Women Lead Peacebuilding and Recovery Efforts in Mozambique”, 7 de julio de 2025.

accesible, eficaz y que responda mejor a las necesidades de las mujeres.¹⁴

Sudáfrica	
Actores negociadores	Gobierno, oposición política y social
Terceras partes	--
Acuerdos relevantes	--

Síntesis:
Más de tres décadas después del fin del apartheid (1948–1994), Sudáfrica enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad, delincuencia, corrupción y una tasa de desempleo del 33,2%, una de las más elevadas del mundo. A esto se suma que el histórico partido Congreso Nacional Africano (ANC) perdió por primera vez la mayoría absoluta en las elecciones de mayo de 2024, viéndose obligado a pactar con otras diez formaciones. En este contexto, el presidente Cyril Ramaphosa convocó un Diálogo Nacional con el fin de abordar diferentes temáticas (empleo, cohesión social, gobernanza, violencia de género, reforma agraria y transformación económica) y forjar un nuevo pacto social que sustente un Plan de Desarrollo Nacional a 30 años, aunque enfrenta críticas por falta de inclusividad y la financiación controvertida.

El Gobierno de Sudáfrica puso en marcha un proceso de Dialogo Nacional para buscar soluciones colectivas a la crisis social, política, económica y de seguridad que padece el país. El 10 de junio, el presidente Cyril Ramaphosa anunció la convocatoria del Diálogo Nacional que tiene como objetivo fomentar la unidad y encontrar soluciones colectivas a los múltiples desafíos del país, abordando los siguientes temas: Pobreza, desigualdad y hambre; Transformación económica y creación de empleo; Cohesión social y construcción nacional; Violencia de género y seguridad; Gobernanza, rendición de cuentas y democracia participativa; Reforma agraria y seguridad alimentaria.¹⁵

En relación con su procedimiento, el proceso de dialogo se articuló a través de varias estructuras: un Grupo de Personas Eminentes que ofrecerá orientación de alto nivel; un Comité Interministerial presidido por el vicepresidente que coordinará el papel del Gobierno; un Comité Directivo que supervisará el programa de acción; y una Secretaría que gestionará las operaciones diarias. Del mismo modo, se creó un Equipo de Trabajo Preparatorio para el Diálogo Nacional encargado de

movilizar a la sociedad civil, estableciendo varios comités de trabajo. El comité preparatorio informó que para financiar el proceso se necesitarán unos 700 millones de rands (unos 39 millones de dólares), lo que generó críticas de algunos partidos de la oposición. Al respecto Enoch Godongwana, ministro de Finanzas, informó que incluyó el diálogo como una de las seis prioridades de gasto no financiado.¹⁶

La iniciativa de dialogo, que lleva años en discusión, busca involucrar a una amplia variedad de sectores sociales. Finalmente, el 15 de agosto dio inicio el Dialogo Nacional con una convención de dos días en la Universidad de Sudáfrica (UNISA), en Pretoria, que reunió a unos 1.000 representantes del gobierno, la mayoría de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. Aunque Ramaphosa calificó el diálogo como un esfuerzo de “construcción nacional”, ausencias significativas, como la de la Alianza Democrática –el segundo partido más grande en el gobierno unificado– y críticas que acusaron a la ANC de intentar controlar el Dialogo y usarlo como plataforma de campaña de cara a las elecciones locales de 2026, debilitaron el proceso. Como resultado de la Primera Convención, y tras la revisión por parte del Grupo de Personas Eminentes, en diciembre de 2025, el presidente Ramaphosa confirmó las nominaciones de representantes de 33 sectores sociales para integrar el Comité Directivo del Diálogo Nacional, formalizando así lo acordado en agosto. Posteriormente, a principios de 2026 la UNISA acogió la formación del Comité Directivo.¹⁷ Una segunda Convención Nacional, prevista para marzo de 2026, consolidará las propuestas de los distintos compromisos en una visión nacional y un programa de implementación. La agenda se extenderá durante ocho meses en diversos espacios del país (escuelas, centros comunitarios, lugares de culto, medios de comunicación y plataformas digitales)¹⁸ con el objetivo de forjar un nuevo pacto social para impulsar un Plan de Desarrollo Nacional a 30 años.¹⁹

Género, paz y seguridad

El Gobierno sudafricano, por medio del Departamento de Desarrollo Social, se comprometió a garantizar la representación equitativa de las mujeres en todas las estructuras que apoyan y guían el Diálogo Nacional, incorporando la movilización de mujeres jóvenes y mayores, mujeres habitantes de zonas urbanas y

14. ONU Mulheres Moçambique, 10 de noviembre de 2025. Post red social Facebook: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1240913101412802&set=a.555566466614139>

15. Republic of South Africa, “State of the Nation 2026. National Dialogue”.

16. Mthobisi Nozulela, “R770 million National Dialogue bill sparks uproar: final say lies with finance minister”, *IOL*.

17. University of South Africa, “The National Dialogue Steering Committee entrusted with helping to reimagine South Africa’s future”, 19 de enero de 2026.

18. Para mayor información véase web oficial: <https://nationaldialogue.co.za/>

19. Jakie Cilliers, “South Africa’s National Dialogue: putting the cart before the horse”, *ISS*, *ISS Today*, 24 de junio de 2025.

rurales, mujeres de diferentes comunidades étnicas y lingüísticas, mujeres con discapacidad e incluyendo diversidad sexual LGBTQ+. Este compromiso emana de uno de los puntos abordados en el Diálogo Pre-Nacional de Mujeres Sudafricanas del año 2024, convocado por el Instituto de Justicia y Reconciliación, en donde se hizo hincapié en que el proceso del Diálogo Nacional debe centrarse en todas las cuestiones que afectan a las mujeres y que deben reflejarse las diversas perspectivas y prioridades de todas las mujeres sudafricanas. Del mismo modo, el Ejecutivo se comprometió a garantizar la integración de la perspectiva y el enfoque de género en las propuestas y soluciones que se implementen del Diálogo.²⁰

El Gobierno de Senegal y una facción del MFDC reafirmaron su compromiso con la paz en Casamance

África Occidental

Senegal (Casamance)	
Actores negociadores	Gobierno, facciones del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC)
Terceras partes	CEDEAO, Center for Humanitarian Dialogue, Guinea Bissau, Cabo Verde, Coordinadora de Organismos Subregionales para la Paz en Casamance (COSPAC)
Acuerdos relevantes	Acuerdo General de Paz entre el Gobierno de la República de Senegal y MFDC (Acuerdo de Ziguinchor) (2004)

Síntesis:
Casamance es una región senegalesa, situada al sur del país y separada geográficamente del resto de Senegal por el río Gambia, alrededor del cual se encuentra el Estado de Gambia. La región tiene una cultura y un idioma distintos debido a que durante parte del periodo colonial estuvo bajo administración portuguesa. Desde 1982 el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) demanda su independencia. El enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el MFDC tuvo su máxima expresión de violencia durante los años noventa, concluyendo en 2004 con la firma de los acuerdos de paz por su máximo líder, Diamacoune Senghor. Tras el fallecimiento de Senghor en enero de 2007, el MFDC se dividió en tres facciones armadas principales, encabezadas por Salif Sadio, Caesar Badiatte y Mamadou Niantang Diatta. Desde entonces han proseguido enfrentamientos de baja intensidad protagonizados por las diferentes facciones que no reconocen el acuerdo alcanzado con el Gobierno y que luchan por aumentar su control sobre el territorio.

El Gobierno de Senegal y una facción del Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC por sus siglas en francés) reafirmaron su compromiso con la paz en la región de Casamance. Una delegación del Gobierno de Senegal, representada por el Comité Ad

Hoc para la Paz en Casamance, y una delegación del Comité Provisional de las Alas Política y de Combate Unificadas del MFDC se reunieron en Bissau los días 21 y 22 de febrero. La reunión se celebró bajo los auspicios de la República de Guinea-Bissau, garante del proceso y la facilitación del Centro para el Diálogo Humanitario, que apoya el proceso de paz de Casamance entre el Gobierno y las tres facciones del MFDC desde el año 2014. Esta nueva ronda de negociación se basó en conversaciones previas entre el Gobierno de Senegal y la facción liderada por César Atoute Badiatte, que culminaron con la firma de una Declaración de Compromiso Mutuo sobre los Términos del Desarme el 4 de agosto de 2022 en Bissau. Tras dos días de intensas negociaciones, centradas principalmente en la seguridad, la justicia y las demandas políticas, ambas delegaciones reafirmaron su compromiso con el desarme, si bien las modalidades prácticas aún están por definir.²¹ El renovado compromiso con la paz que, según medios locales, incluiría un indulto presidencial para los rebeldes encarcelados, amnistía para los combatientes y un programa de reintegración, fue firmado en Bissau el 23 de febrero en presencia del presidente de Guinea-Bissau, Umaro Embaló, y del primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, quien elogió el acuerdo como “un gran paso hacia una paz definitiva en Casamance” subrayando la prioridad que el nuevo Gobierno de Senegal otorga a la resolución del conflicto. Como muestra adicional del compromiso de Senegal con la región, el año pasado el presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye presentó un plan para invertir 53.000 millones de francos CFA, unos 88 millones de dólares, en la limpieza de minas terrestres de la zona y el apoyo al desarrollo económico. El plan, según el Gobierno, representa un paso importante en la construcción de la paz, buscando restablecer la presencia del Estado en Casamance mediante la construcción de escuelas, centros de salud y oficinas gubernamentales.²² Si bien el acuerdo firmado con la facción de Badiatte representa un paso importante hacia la paz, analistas señalaron que este solo involucra a una facción del grupo rebelde, menos poderosa que las otras dos, y excluye a la facción más radical liderada por Salif Sadio.²³

Género, paz y seguridad

La Plataforma de Mujeres por la Paz en Casamance (PFPC por sus siglas en francés) informó en sus redes que el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, celebró un encuentro en Ziguinchor, en donde se analizaron dos temas centrales: desafíos y problemáticas de seguridad

20. Department of Social Development, “The National Dialogue must be a place for women to raise their voices”, 11 de Agosto de 2025.
21. Centre for Humanitarian Dialogue, “The State of Senegal and the Provisional Committee of the Unified Political and Combat Wings of the MFDC Take a Major Step in the Casamance Peace Process”, 28 de febrero de 2025.
22. ADF, “Peace Agreement Offers Hope in Senegal’s Casamance Region”, ADF, 18 de marzo de 2025.
23. Babacar Dione y Baba Ahmed, “Senegal has signed a deal with separatist rebels. But will it end one of Africa’s longest conflicts?”, *Independent*, 28 de febrero de 2025.

para la consolidación de la paz en Casamance; y empoderamiento de las mujeres en el contexto del retorno de poblaciones desplazadas. Por otro lado, la PFPC también informó que el 21 de noviembre, con motivo del 25 aniversario de la resolución 1325, tuvo lugar un intercambio interregional sobre el tema “La mujer y la consolidación de la paz”. Organizado conjuntamente por las embajadas de Irlanda y Colombia en Dakar, y en colaboración con el Centro para el Diálogo Humanitario y la oficina nacional de ONU Mujeres para Senegal, mujeres de Irlanda, Colombia y Senegal, a partir de sus experiencias de primera mano en los procesos de paz de sus países, abordaron de forma interactiva reflexiones sobre el legado de la resolución 1325 y como abogar por su implementación.²⁴

Cuerno de África

Eritrea – Etiopía	
Actores negociadores	Eritrea, Etiopía
Terceras partes	Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, EEUU
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Cese de Hostilidades (Argel, 2000), Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Eritrea y el Gobierno de la República Federal Democrática de Etiopía o Acuerdo de Diciembre (Argel, 2000), Decisión concerniente a la delimitación de la frontera entre Eritrea y Etiopía, EEBC (2002), Acuerdo sobre la Paz, la Amistad y la Cooperación Integral (2018)

Síntesis:

En 1993 Eritrea se independizó de Etiopía, aunque la frontera entre ambos países no quedó claramente delimitada, lo que les enfrentó entre 1998 y 2000 causando más de 100.000 víctimas mortales. En junio de 2000 firmaron un acuerdo de cese de hostilidades, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la misión UNMEE para supervisarlos y en diciembre firmaron el acuerdo de paz de Argel. Éste estableció que ambos se someterían a la decisión que acordase la Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía (EEBC, por sus siglas en inglés), encargada de delimitar y demarcar la frontera basándose en los tratados coloniales pertinentes (1900, 1902 y 1908) y el derecho internacional. En abril de 2002 la EEBC anunció su dictamen, que asignó la disputada aldea fronteriza de Badme (epicentro de la guerra y actualmente administrada por Etiopía) a Eritrea, decisión rechazada por Etiopía. A finales de 2005, Eritrea decidió restringir las operaciones de la UNMEE, frustrada por los nulos avances en la implementación de la decisión de la EEBC debido a la insuficiente presión sobre Etiopía para que cumpliera el dictamen, lo que forzó la retirada de la UNMEE en 2008.

Un año antes, la EEBC finalizó sus trabajos sin poder implementar su mandato por obstrucciones de Etiopía, por lo que la situación continúa estancada desde entonces. Ambos países mantuvieron desde entonces una situación caracterizada por un clima de preguerra, con la presencia de centenares de miles de soldados desplegados en la frontera común, enfrentamientos esporádicos y una retórica beligerante. En 2018 se alcanzó un acuerdo histórico facilitado por EAU y Arabia Saudita, con el apoyo de EEUU, que pretendía poner fin al conflicto entre ambos Estados.

Durante el año 2025 la parálisis que afecta el proceso de negociación iniciado en 2018 entre Eritrea y Etiopía alcanzó su momento de mayor deterioro, lo que desencadenó iniciativas de diversos países para promover la reactivación del diálogo entre las partes, principalmente de Arabia Saudita y de EEUU. El año estuvo marcado por una escalada sostenida de tensiones políticas, militares y retóricas, especialmente en torno a dos ejes: la aspiración etíope de acceso al mar Rojo y la evolución de la crisis política y de seguridad en Tigré.

La alianza táctica que ambos países habían mantenido durante la guerra de Tigré (2020-2022) se deshizo tras el Acuerdo de Pretoria (2022), del cual Eritrea quedó excluida. A partir de ese momento, se reinstaló una desconfianza estructural que en 2025 se tradujo en acusaciones cruzadas, movilizaciones militares y ausencia total de mecanismos de consulta política.²⁵ No obstante, se desplegó durante 2025 una actividad diplomática orientada a evitar una escalada militar abierta y a reabrir canales de diálogo entre ambos países, principalmente por parte de Arabia Saudita y EEUU. En este sentido, Arabia Saudita habría iniciado un proceso de mediación entre ambos países.²⁶ Cabe destacar contactos por separado realizados a finales de julio por el ministro de Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, con sus homólogos eritreo, Osman Salih, y etíope, Gideon Timotheron. Además, delegaciones de Etiopía y Eritrea habrían mantenido dos rondas de conversaciones en Arabia Saudita en julio. Ninguna de las partes se pronunció oficialmente sobre esta mediación saudita en curso.²⁷

En segundo lugar, actores internacionales clave, en particular EEUU, mantuvieron contactos paralelos con Asmara y Addis Abeba. En junio de 2025, el embajador de Etiopía en EEUU se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump.²⁸ En septiembre de 2025, altos responsables estadounidenses se reunieron por separado con el primer ministro etíope –el asesor de EEUU para África, Massad

24. Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance, Post publicados el 21 de septiembre y 21 de noviembre de 2025 en la red social Instagram: <https://www.instagram.com/pfpcsenegal/>

25. Véase el resumen sobre Eritrea-Etiopía en el capítulo 2 (Tensiones) en *Alerta 2026! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Icaria: Barcelona, 2026.

26. NewsAddis, *Saudi FM Contacts Ethiopian & Eritrean FMs to Resolve Conflict*, 26 de julio de 2025.

27. Ibidem.

28. The Ethiopian Herald, *Ethiopia, U.S. Eye Closer Ties in High-Level Meeting*, 19 de junio de 2025.

Boulos, se reunió en Etiopía con el primer ministro Abiy Ahmed– y con el ministro de Asuntos Exteriores eritreo al margen de la Asamblea General de la ONU, sin que se derivasen anuncios públicos ni compromisos verificables. Cabe añadir que en octubre el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, solicitó una mediación internacional con Eritrea sobre el acceso al mar, insistiendo en una reivindicación “irreversible” sobre la costa en un contexto de crecientes tensiones entre los vecinos del Cuerno de África, y anunció haber mantenido conversaciones sobre la cuestión con EEUU, Rusia, China, la UA y la UE.²⁹

Etiopía	
Actores negociadores	Gobierno, partidos políticos, oposición política y social, ciudadanía
Terceras partes	PNUD, UE, Alemania, Noruega, Berghof Foundation
Acuerdos relevantes	--

Síntesis:
El régimen que ha gobernado Etiopía desde 1991 se ha enfrentado a una serie de movimientos opositores que reclamaban avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front), controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, gobernó el país entre 1991 y 2019 con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. El régimen federal étnico implantado por el EPRDF no resolvió la cuestión nacional y consolidó una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. Los cambios y la expansión territorial de Addis Abeba que introducía el Addis Abeba Master Plan en 2014 fueron el catalizador de algunas de estas cuestiones, desencadenando importantes protestas y represión mortal en el país, en especial en la región de Oromiya. La movilización social contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn en 2018 y la designación de Abiy Ahmed, que emprendió reformas que pretendían mitigar las tensiones étnicas, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles. Los cambios introducidos por el Gobierno de Abiy Ahmed contribuyeron a aflorar agravios, así como algunos de los déficits y retos en términos de gobernabilidad, que incrementaron la inestabilidad y exacerbaron conflictos larvados y nuevos ciclos de violencia (guerra en Tigré, escalada de la violencia en Oromiya y Amhara). Entre estas reformas, destacó la puesta en marcha de un proceso de diálogo nacional. En 2021, el Parlamento aprobó el mandato de la Comisión de Diálogo Nacional de Etiopía (ENDC, por sus siglas en inglés).³⁰ La

ENDC inició su labor en 2022, con un mandato de tres años, impulsando un proceso en diferentes fases que culminara en un diálogo nacional. El mandato establece tres objetivos generales: construir un consenso nacional sobre las cuestiones nacionales más fundamentales, generar confianza entre los grupos étnicos y entre estos y el Estado, y allanar el camino hacia una cultura del diálogo. El proceso se ha visto afectado por numerosas dificultades.

Durante 2025, el proceso de diálogo nacional en Etiopía **no experimentó avances sustantivos** y permaneció en una situación de **estancamiento prolongado**, pese a la continuidad formal de la Comisión de Diálogo Nacional de Etiopía (ENDC). Diversas fuentes independientes –think tanks, análisis académicos, sociedad civil y medios especializados– coincidieron en que el diálogo nacional **no logró evolucionar hacia una fase deliberativa o decisoria**, ni desempeñó un papel relevante en la gestión de los principales conflictos políticos y armados del país. La ENDC **jugó un papel limitado y eminentemente técnico**, sin capacidad para articular un proceso político nacional efectivo. El diálogo nacional permaneció marginado frente a una agenda dominada por respuestas securitarias, conflictos armados activos y una profunda polarización política.³¹ Creada en 2021 como una de las reformas emblemáticas del Gobierno de Abiy Ahmed, la ENDC tenía el mandato de facilitar un proceso inclusivo para abordar las “cuestiones nacionales fundamentales” que dividen al país. Sin embargo, al inicio de 2025 el diálogo ya arrastraba limitaciones estructurales: desconfianza profunda entre actores, exclusión de grupos armados clave, ausencia de condiciones mínimas de seguridad y una percepción extendida de falta de independencia política.³²

Estas debilidades se hicieron aún más evidentes a lo largo del año. Aunque **la ENDC mantuvo actividad institucional**, organizando reuniones y consultas –incluidos contactos con sectores de Tigré y con la diáspora–, **el proceso no avanzó más allá de la fase preparatoria**, incluso tras más de tres años de funcionamiento. Un análisis del Institute for Security Studies (ISS) publicado en agosto señalaba que el diálogo nacional etíope “se ha estancado”, subrayando que la Comisión seguía atrapada en la recolección de insumos sin haber iniciado una deliberación nacional significativa. Según el ISS, la inseguridad persistente y los conflictos armados en Amhara, Oromya y Tigré habían impedido la participación de actores clave, mientras que la retirada o no incorporación de partidos de oposición y grupos influyentes ha erosionado gravemente la credibilidad del proceso. El propio ISS cuestionaba la viabilidad de completar un diálogo creíble incluso tras la extensión del mandato de la

29. ArabNews, *Ethiopia calls for international mediation with Eritrea over sea access*, 28 de octubre de 2025.

30. Véase la página web de la Comisión de Diálogo Nacional de Etiopía.

31. Desalegn Gedebo, Amanuel, “Rethinking Ethiopia's National Dialogue. Navigating Conflict and Growing Repression Ahead of 2026 Elections”, Clingendael, 1 de julio de 2025.

32. Véase resumen sobre Etiopía en *Negociaciones de paz 2024. Análisis de tendencias y escenarios*, Icaria: Barcelona, 2025.

ENDC hasta 2026.³³ La sociedad civil etíope ha formulado críticas similares, como pone de manifiesto un informe³⁴ sobre las actividades de la ENDC en el que identifica problemas persistentes de inclusión, representatividad y legitimidad. El informe subraya que, para muchas comunidades afectadas por la violencia, el diálogo nacional no responde a sus prioridades inmediatas ni tiene incidencia sobre la realidad política y de seguridad que enfrentan.

Género, paz y seguridad

A pesar del estancamiento y parálisis de la ENDC, organizaciones de mujeres del país continuaron promoviendo espacios e iniciativas de diálogo que superaran esta situación. En este sentido, el Día Internacional de la Mujer reunió a actores clave para destacar los avances del movimiento feminista y exigir una mayor acción política. El evento señaló que se requieren cambios en el funcionamiento de la sociedad, con una mayor participación de quienes ostentan el poder. Al debate asistió Nechte Felate, Directora de Asuntos de la Mujer, la Infancia y la Juventud del Parlamento etíope y Zemdena Abebe, Coordinadora Nacional de SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa), además de otras representantes de organizaciones y activistas por los derechos de las mujeres de todo el país. En este sentido, Zemdena destacó que SIHA había desempeñado un papel crucial en la integración de la perspectiva de género en el proceso de diálogo nacional de Etiopía. Como parte de TIMRAN, una organización local de la sociedad civil, SIHA ha trabajado para garantizar una representación adecuada de las mujeres en los puestos de toma de decisiones a través del proceso de diálogo nacional, y publicado recomendaciones de políticas para garantizar que el proceso de diálogo nacional sea inclusivo y libre de influencias políticas. Para conmemorar el 30 aniversario de la Declaración de Beijing, ONU Mujeres Etiopía organizó diálogos intergeneracionales para mujeres con el fin de compartir visiones sobre la igualdad de género y debatir el liderazgo femenino en la acción humanitaria, y en septiembre impartió, en colaboración con la Red de Asociaciones de Mujeres Etíopes (NEWA), capacitaciones sobre la prevención de la violencia contra las mujeres en los procesos políticos. ONU Mujeres Etiopía también publicó su estrategia 2026-2030 en la que marcó su hoja de ruta para lograr la igualdad de género en el país.

Etiopía (Amhara)	
Actores negociadores	Etiopía, facción de las milicias Fano (Amhara Fano Popular Organization, AFPO)
Terceras partes	Amhara Peace Council, UA, IGAD
Acuerdos relevantes	--

Síntesis:

La comunidad amhara, mayoritariamente presente en la región de Amhara pero también en otras regiones del país, se ha visto marginada en el marco de las movilizaciones que llevaron al poder al primer ministro Abiy Ahmed (2015-2018). La escalada de la violencia y la represión en la región en 2023 se remonta al acuerdo de paz firmado en 2022 por el Gobierno Federal y el Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) para poner fin a la guerra en Tigré (2020-2022), acuerdo del que la comunidad amhara quedó excluida a pesar de que las milicias nacionalistas Fano y las fuerzas especiales amhara –un grupo paramilitar vinculado al gobierno regional– lucharon del lado del Ejército Federal. La percepción de traición se extendió en la región de Amhara, especialmente después de que Abiy anunciara planes para dismantelar las fuerzas especiales presentes en cada una de las 11 regiones étnicas de Etiopía, entre ellas las milicias Fano, con la voluntad de integrarlas y cooptarlas en los cuerpos de seguridad federales y evitar su instrumentalización étnica por parte de los Gobiernos regionales. Aunque algunas de las fuerzas especiales amhara aceptaron integrarse en el Ejército y la Policía, muchos desertaron y se unieron a las milicias Fano. Además, este movimiento nacionalista amhara aprovechó la guerra en la región de Tigré para, a través de estas milicias paramilitares, recuperar y ocupar dos territorios en disputa histórica que forman parte de Tigré (Tigré Occidental y Meridional, llamados por el nacionalismo amhara Welkait-Tsegede y Raya, respectivamente) donde se estableció una administración provisional amhara que el Gobierno Federal declaró ilegal al finalizar el conflicto y que entre 2023 y 2024 dismanteló. En 2024 un consejo de notables de la comunidad, líderes religiosos y la InterReligious Council of Ethiopia se organizaron para facilitar canales de diálogo entre las partes enfrentadas y la comunidad internacional, y celebraron una conferencia de paz en Bahir Dar (capital de Amhara) que dio lugar a la creación del Amhara Peace Council, espacio que desde entonces ha estado llevando a cabo llamamientos a la UA y la IGAD para que faciliten negociaciones de paz. Las principales plataformas Fano exigían la revisión del Acuerdo de Pretoria (2022), garantías constitucionales sobre territorios disputados (Welkait, Raya, Metekel), y mecanismos de protección colectiva para la población amhara, mientras que la posición federal se reducía a un proceso de DDR y el reconocimiento del monopolio estatal de la fuerza.

Durante 2025, se alcanzó un **acuerdo entre el Gobierno regional y una facción de las milicias Fano**. A pesar de ello, **el conflicto armado en la región etíope de Amhara evolucionó hacia una insurgencia crónica y fragmentada**, caracterizada por picos periódicos de violencia, una intensificación del uso de drones por parte del Estado y graves abusos contra la población

33. Simie Meteka, Tadesse, “Ethiopia’s National Dialogue needs time and an interim report”, ISS, 27 de agosto de 2025.

34. Bekele, Girma, “Ethiopia’s National Dialogue Commission: Last Chance for Peace or Another Lost Cause?”, ReligionUnplugged, 9 de octubre de 2025.

civil. En este sentido, el 4 de diciembre se llevó a cabo la **firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno regional de Amhara y una facción de las milicias Fano**, la Amhara Fano Popular Organization (AFPO), con mediación de la UA y la IGAD.³⁵ La UA, a través de la vicepresidenta de la Comisión de la UA, Selma Malika Haddadi, declaró que el acuerdo no solo era positivo para Etiopía sino también un ejemplo para toda África. Por su parte, la IGAD estuvo representada por el vicesecretario ejecutivo de la organización, Mohamed Abdi Ware. Este acuerdo, anunciado oficialmente por las autoridades, fue presentado como un hito histórico. Incluyó compromisos formales para el cese de hostilidades, la reintegración de combatientes en las estructuras de seguridad oficiales bajo ciertas condiciones y la apertura de canales de diálogo político. Sin embargo, el acuerdo no implicó una solución definitiva para todos los actores o todas las facciones de Fano, debido a que no existe una cadena de mando unificada. Por el contrario, dicho acuerdo fue cuestionado por otros comandantes, que solo aceptaban negociar si había presencia internacional.³⁶ Diversos análisis señalaron que su impacto será limitado a menos que Adis Abeba haga frente al conjunto de agravios que alimentaron el surgimiento del conflicto.

Género, paz y seguridad

En 2025, la agenda de género, paz y seguridad en la región de Amhara estuvo marcada por **la intensificación del conflicto armado y, en paralelo, la emergencia de iniciativas locales de resiliencia lideradas por mujeres**. La prolongación de la insurgencia Fano y las operaciones contrainsurgentes del Estado expusieron a mujeres y menores a niveles elevados de violencia, incluyendo desplazamiento, inseguridad alimentaria y violencia basada en género. En este contexto, la dimensión de protección siguió dominando la agenda, sin una incorporación de mujeres en los incipientes procesos de diálogo. Sin embargo, organizaciones de base y programas impulsados por actores internacionales siguieron tejiendo actividades en el ámbito local. Iniciativas apoyadas por ONU Mujeres y organizaciones etíopes como Progynist han promovido el liderazgo comunitario de mujeres en contextos de crisis, fortaleciendo capacidades en mediación comunitaria, gestión de conflictos y respuesta a la violencia de género. Estas experiencias han contribuido a articular espacios informales de diálogo y cohesión social, aunque sin una traslación a los procesos formales vinculados al acuerdo parcial alcanzado en diciembre de 2025.³⁷

De forma más estructural, diversos análisis subrayaron que **la exclusión de las mujeres de las negociaciones formales sigue siendo un rasgo persistente en Etiopía**,

pese a su papel activo en la construcción de paz a nivel comunitario.³⁸ En Amhara, esta brecha evidenció una agenda de WPS fragmentada: dinámica y en expansión en el ámbito local, pero todavía marginal en el plano político formal.

Etiopía (Tigré)	
Actores negociadores	Gobierno Federal, autoridades político-militares de la región etíope de Tigré (Frente de Liberación Popular de Tigré)
Terceras partes	UA, EEUU, IGAD
Acuerdos relevantes	Acuerdo para una Paz Duradera a través de un Cese de Hostilidades Permanente entre el Gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía y el Frente de Liberación Popular de Tigré (Pretoria, 2022), Declaración Ejecutiva sobre las Modalidades de Implementación del Acuerdo para una Paz Duradera a través de un Cese de Hostilidades Permanente (Nairobi, 2022)

Síntesis:

La región de Tigré (estado del norte de Etiopía, fronterizo con Etiopía y de mayoría de población tigré) es escenario de un conflicto armado desde 2020 y de intentos de iniciativas de diálogo. El nombramiento de Abiy Ahmed como nuevo primer ministro de Etiopía a principios de 2018 propició importantes y positivos cambios a nivel interno y a nivel regional en Etiopía. Sin embargo, desde su ascenso al poder, el partido Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) y el liderazgo de la comunidad tigré, antaño núcleo duro de la coalición en el poder (EPRDF), vio erosionado su poder respecto a la toma de decisiones en el Gobierno. En paralelo, el conflicto entre Eritrea y Etiopía entre 1998 y 2000 tuvo su origen en las disputas fronterizas entre ambos países. Tigré, como estado fronterizo en el que se tienen que implementar decisiones relativas al acuerdo entre Eritrea y Etiopía, como la demarcación fronteriza y el estatus de localidad de Badme, se vio marginada del proceso de paz entre ambos Gobiernos. A eso se sumó la marginación progresiva del TPLF del poder central, creando un clima de tensión creciente que culminó con el estallido de un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad etíopes y los cuerpos de seguridad de la región de Tigré. La crisis adquirió dimensiones regionales por la implicación de Eritrea, así como de milicias y cuerpos de seguridad de la vecina región etíope de Amhara. Desde el inicio del conflicto armado en noviembre de 2020 la comunidad internacional, y en especial la UA, han intentado promover negociaciones de paz entre las partes, rechazadas por parte del Gobierno Federal. Entre marzo y agosto de 2022 estuvo vigente una tregua humanitaria, tras la cual se produjo una nueva escalada de la violencia. A finales de octubre de ese año se formalizaron negociaciones de paz en Pretoria (Sudáfrica) bajo los auspicios de la UA que condujeron a la firma de un acuerdo de cese de hostilidades en noviembre de 2022. Desde entonces se ha ido implementando el acuerdo de paz, proceso no exento de dificultades.

35. FANA, Ethiopia's Amhara Regional Gov't, Amhara Fano Popular Organization Sign Permanent Peace Deal, 4 de diciembre de 2025.

36. The Africa Report, Ethiopia's Amhara region, Fano faction sign breakthrough agreement, 5 de diciembre de 2025.

37. Progynist, Impactful Collaboration for Women's Empowerment in Amhara Region!, 21 de mayo de 2025.

38. Anonymous, Confronting the Exclusion of Women in Ethiopia's Peace Processes: A Background Paper, European Institute of Peace, 2025.

Durante 2025, el proceso de paz en la región etíope de Tigré atravesó **su momento de mayor fragilidad desde la firma del Acuerdo de Pretoria** en noviembre de 2022. Aunque no se reanudó una guerra abierta, el año estuvo marcado por **una combinación de implementación incompleta del acuerdo, creciente fragmentación política y militar interna en Tigré, y un deterioro de las relaciones entre Mekelle y Addis Abeba**. Desde el punto de vista formal, el Acuerdo de Pretoria siguió siendo el marco de referencia del proceso de paz. Algunos de sus elementos centrales –el cese de hostilidades a gran escala y la integración parcial de Tigré en estructuras federales– se mantuvieron. Sin embargo, las cuestiones estructurales más sensibles quedaron sin implementar: la disputa territorial sobre Tigré Occidental, el retorno de las personas desplazadas, la retirada completa de fuerzas no federales, la justicia transicional y la reintegración política plena del TPLF.

Uno de las cuestiones más relevantes de 2025 fue la **aguda crisis política interna en Tigré**. La rivalidad entre el entonces presidente de la Administración Regional Interina, Getachew Reda, y el liderazgo del TPLF encabezado por Debretsion Gebremichael culminó en la destitución de Reda en abril y su sustitución por el teniente general Tadesse Werede. Esta pugna debilitó la autoridad institucional regional, paralizó la gobernanza y erosionó la capacidad de interlocución coherente con el Gobierno federal, lo que afectó al proceso de paz.³⁹ Paralelamente, la cancelación del estatus legal del TPLF por parte de la Comisión Electoral Nacional en mayo constituyó un punto de inflexión negativo. Esta decisión excluyó de facto al principal actor político tigrayano del proceso electoral previsto para 2026 y reavivó temores de una repetición del ciclo político que precedió a la guerra de 2020. Diversos análisis advirtieron que esta medida minaba la lógica inclusiva del proceso de paz y agravaba la desconfianza entre Tigré y el Gobierno federal.⁴⁰

En el plano de la seguridad, 2025 estuvo marcado por nuevas dinámicas de inestabilidad interna. Destacó la **aparición y consolidación de la Tigray Peace Force (TPF)**, una facción armada compuesta por excombatientes descontentos con el TPLF y percibida por Mekelle como cercana a Addis Abeba. Los enfrentamientos entre la TPF y las fuerzas tigrayanas, así como incidentes en la frontera con Afar, evidenciaron una peligrosa deriva hacia conflictos en el seno de la oposición político-militar de Tigré que el Acuerdo de Pretoria no había previsto

ni contenido y que podrían llevar al traste el Acuerdo de Pretoria.⁴¹ Otro elemento clave fue la **persistencia del conflicto territorial en Tigré Occidental**. La negativa de las autoridades amhara a retirarse y la ausencia de un mecanismo claro para resolver la disputa dejaron a decenas de miles de personas desplazadas en un limbo prolongado. Informes de finales de 2025 documentaron muertes por inanición en campos de desplazados, subrayando el vínculo directo entre bloqueo político, inseguridad territorial y crisis humanitaria.⁴² Finalmente, varios análisis advirtieron que la evolución en Tigré durante 2025 tuvo implicaciones más amplias para la estabilidad etíope y regional. La creciente tensión entre Etiopía y Eritrea, en parte vinculada a dinámicas tigrayanas y a supuestos realineamientos del TPLF, aumentó el riesgo de una escalada indirecta que podría desbordar el marco del proceso de paz.

La región etíope de Tigré atravesó su momento de mayor fragilidad desde la firma del Acuerdo de Pretoria en noviembre de 2022

Género, paz y seguridad

Durante 2025, la agenda de género, paz y seguridad en Tigré reflejó las **contradicciones de un escenario posconflicto incompleto**, donde la implementación parcial del Acuerdo de Pretoria convivió con elevados niveles de violencia estructural y exclusión política. Las mujeres siguieron siendo uno de los colectivos más afectados por el legado del conflicto, particularmente en relación con la violencia sexual y de género, cuya prevalencia masiva durante la guerra continuó condicionando los procesos de reconciliación y justicia transicional.⁴³ En este contexto, la agenda MPS se vinculó principalmente a los pilares de **justicia, reparación y reconstrucción social**, con un papel central de organizaciones lideradas por mujeres en la provisión de servicios a sobrevivientes y en la reconstrucción del tejido comunitario. No obstante, estas iniciativas operan en un entorno caracterizado por **limitaciones institucionales, falta de financiación y escasa inclusión en los marcos formales de toma de decisiones**.

Al mismo tiempo, la crisis política interna en Tigré (2025) y la exclusión del TPLF del proceso electoral reforzaron una dinámica de **cierre político que también afecta a la participación de las mujeres**, reduciendo los espacios de interlocución inclusiva. En paralelo, informes destacan que, a pesar de los avances previos en representación política por parte de las mujeres, el conflicto ha revertido significativamente estos logros – de la histórica representación del 50% en el Parlamento

39. Véase el resumen de Etiopía (Tigré) en el capítulo 2 (Tensiones) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2026! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Icaria: Barcelona, 2026.

40. Plaut, Martin, *The TPLF statement on the implementation of the Pretoria Peace Agreement*, 16 de abril de 2025.

41. ADF-Magazine, *New Rebel Group Threatens Ethiopia's Fragile Peace*, 9 de diciembre de 2025.

42. Warecho, *Tigray Post-War Recovery Progresses Slowly Three Years After Peace*, 18 de agosto de 2025.

43. GIWPS, *Women, Peace and Security Conflict Tracker: November Updates-Spotlight: Ethiopia*, 26 de noviembre de 2025.

regional, se ha pasado a una mujer en el gabinete de transición formado por 27 miembros.⁴⁴

Así, en 2025 la agenda de género en Tigré se caracterizó por un protagonismo de las mujeres en la recuperación social, pero con escasa incidencia en la arquitectura política del proceso de paz. De forma más estructural, diversos análisis subrayaron que **la exclusión de las mujeres de las negociaciones formales sigue siendo un rasgo persistente en Etiopía**, pese a su papel activo en la construcción de paz a nivel comunitario.⁴⁵

Etiopía – Egipto – Sudán ⁴⁶	
Actores negociadores	Etiopía, Egipto y Sudán
Terceras partes	UA, Banco Mundial (BM), EAU, UE y EEUU
Acuerdos relevantes	Tratado anglo-egipcio (1929) y su versión modificada, el Acuerdo entre la República de Sudán y la República Árabe Unida (Egipto y Siria) para el uso de las Aguas del Nilo (Cairo, 8 de noviembre de 1959); Iniciativa de la Cuenca del Nilo que abre el proceso del Acuerdo Marco de Cooperación (1999, firmado por 7 países y ratificado por 4 de ellos, en fecha de diciembre de 2023); Acuerdo Marco de Cooperación (Entebbe, 14 de mayo de 2010); Declaración de Jartum (también llamado Acuerdo del Nilo; Jartum, 23 de marzo de 2015).

Síntesis:
El Nilo, el río más largo de África y el segundo de mayor longitud del mundo, ha sido epicentro de disputas durante décadas. En el centro del conflicto se encuentran Egipto y Etiopía, los dos principales actores regionales. La construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD, por sus siglas en inglés) por Etiopía en el cauce del Nilo Azul, afluente del Nilo en territorio etíope, desde 2011 ha exacerbado la tensión entre Etiopía, Egipto y Sudán. Egipto depende del Nilo para prácticamente todo su suministro de agua, por lo que su control es estratégico. Su principal afluente, el Nilo Azul, transcurre desde el lago Tana de Etiopía y se une al Nilo Blanco en Sudán, donde aporta alrededor del 85% del agua del Nilo principal. El 32% del territorio etíope se encuentra en la cuenca del Nilo, donde se concentra cerca del 40% de la población de Etiopía. En el caso de Sudán, el Nilo atraviesa todo el país de sur a norte y proporciona alrededor del 77% del agua dulce del país.⁴⁷ Los acuerdos del periodo colonial, favorables a Egipto y Sudán, ignoraron las necesidades del resto de países ribereños, incluida Etiopía. Los intentos de construir un marco multilateral de gestión han sido constantes, y en 1999 los 11 países de la cuenca crearon la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo

era establecer un tratado multilateral. Egipto y Sudán participaron en el proceso pero rechazaron el acuerdo. En la última década se han promovido diferentes iniciativas, como en 2015, cuando los tres países firmaron la Declaración de Principios de la GERD, sin resultados hasta la fecha. En 2019 el Banco Mundial (BM) promovió contactos con observación de EEUU y entre 2020 y 2021 la UA facilitó conversaciones tripartitas, estancadas, con apoyo de la UE, momento en que el inicio del llenado del embalse precipitó la escalada de la tensión militarizada. El Cairo anunció que la GERD suponía una amenaza a su seguridad y alertó que podría desencadenarse un conflicto si la ONU no intervenía para evitarlo. En agosto de 2022 EAU facilitó conversaciones de paz en Abu Dhabi sin éxito.

Durante 2025, las relaciones entre **Egipto y Sudán**, por un lado, y **Etiopía**, por el otro, en torno a la gestión del río Nilo y, en particular, a la **Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD)**, continuaron dominadas por la **confrontación diplomática y el estancamiento negociador**, sin que se produjera un relanzamiento del proceso de diálogo tripartito. Lejos de abrirse una dinámica de distensión, el año consolidó una situación de conflicto político no resuelto, marcada por retórica dura, acciones unilaterales y una creciente internacionalización del contencioso.

A lo largo del año, **Egipto y Sudán reforzaron su coordinación bilateral**, articulada a través de mecanismos como el formato “2+2” entre ministros de Exteriores e Irrigación. En septiembre de 2025, ambos países emitieron declaraciones conjuntas denunciando la operación unilateral de la presa y reafirmando que su seguridad hídrica es “indivisible”. Sin embargo, **este frente común no derivó en contactos formales con Etiopía**, sino en una estrategia orientada a aumentar la presión diplomática externa.⁴⁸ En este sentido, 2025 estuvo marcado por una **intensa internacionalización del conflicto**. Egipto llevó reiteradamente el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU y buscó apoyos en foros árabes y africanos. El Cairo intentó reencuadrar la disputa como una amenaza a la estabilidad regional, especialmente tras episodios de inundaciones en Egipto y Sudán de octubre, que causaron destrucción e inundación de cultivos en ambos países y el desplazamiento de 1.200 familias en Sudán, y que fueron atribuidos por ambos Estados a una mala gestión de la GERD por parte de Etiopía, declaraciones que Etiopía rechazó argumentando las lluvias excepcionales del monzón.⁴⁹ Etiopía también rechazó cualquier reanudación de negociaciones bajo presión externa y defendió que la GERD debía regirse por principios de utilización equitativa. Análisis subrayaron que Addis

44. Shenkut, Manyingerew, *Breaking Barriers: Women's Participation in Peace and Decision-Making Across Ethiopia*, IGAD, 12 de diciembre de 2025.

45. Anonymous, *Confronting the Exclusion of Women in Ethiopia's Peace Processes: A Background Paper*, European Institute of Peace, 2025.

46. Véase “La cuenca del Nilo: ¿cooperación o conflicto?” en capítulo 5 (Escenarios de riesgo) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2021, Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2021.

47. Nile Basin Initiative. Consultado el 10 de diciembre de 2024

48. Egypt Today, *Egypt, Sudan say Ethiopia's unilateral filling, operation of GERD violates international law*, 3 de septiembre de 2025.

49. Sakr, Dina y Ezz, Mohamed, “Surging Nile waters inundate Egypt and Sudan, revive dispute over Ethiopian”, *Reuters*, 6 de octubre de 2025.

Abeba se centró en consolidar apoyos regionales y en presentar el conflicto como una cuestión técnica, no política, minimizando los incentivos para un diálogo tripartito sustantivo en 2025.⁵⁰

Cabe destacar que esta escalada de la situación coincidió con un nuevo giro diplomático. En una entrevista en octubre, Massad Boulos, asesor principal del presidente estadounidense Donald Trump para asuntos africanos, árabes y de Oriente Medio –y consuegro de Trump–, afirmó que Washington ahora apoyaría un enfoque técnico a la disputa, no mediante presión política, una postura que indica una reorientación del compromiso estadounidense y que priorizaría la transparencia de datos, la coordinación operativa y la mitigación conjunta de riesgos, en lugar de la diplomacia coercitiva.⁵¹ Posteriormente, el presidente de EEUU envió una carta a su homólogo egipcio el 16 de enero de 2026 agradeciendo su papel en el contencioso de Gaza en la que se ofrecía a mediar en el contencioso del río Nilo.

Uno de los hitos más destacables del año fue la **inauguración oficial de la GERD el 9 de septiembre de 2025** por parte de Etiopía, acto al que no asistieron ni Egipto ni Sudán, pero sí representantes de países vecinos, como los presidentes de Somalia y Kenya. En medio de grandes celebraciones, Addis Abeba presentó la presa como un proyecto soberano y un motor de desarrollo regional, mientras que El Cairo y Jartum denunciaron el carácter “unilateral” de la decisión y la consideraron una violación del derecho internacional. Este evento no desencadenó contactos directos de desescalada, sino que, por el contrario, **acentuó la polarización diplomática**. Cabe destacar la intervención de Pietro Salini, CEO de la compañía italiana Webuild, responsable de la construcción de la presa, que remarcó que entendía la preocupación de Egipto, pero destacó que la regulación del agua desde la presa generará beneficios adicionales a los vecinos de Etiopía.⁵² En este sentido, Abdullah Abderrahman, administrador de la presa sudanesa Roseires, a unas decenas de kilómetros de la GERD, señaló que la GERD ha ayudado a controlar el desbordamiento de Roseires, que antes de la construcción de la GERD acostumbraba a ser extremadamente alto. Por otro lado, destacó que se ha producido una reducción significativa de las cantidades de limo y árboles que la estación de lluvias solía aportar a Roseires, cosa que provocaba que la capacidad de almacenamiento de Roseires se redujera en un tercio.⁵³

Etiopía – Somalia (Somalilandia)	
Actores negociadores	Etiopía, Somalia
Terceras partes	Türkiye, Qatar
Acuerdos relevantes	Declaración de Ankara (11 de diciembre de 2024)

Síntesis:
El conflicto entre Etiopía y Somalia se remonta al siglo XIV, cuando los gobernantes de las tierras altas cristianas de Etiopía llevaron a cabo expediciones militares en las tierras costeras donde predominaba el Islam, particularmente en lo que hoy es el norte de Somalia, para abrir rutas comerciales que les dieran acceso al mar. Posteriormente, a finales del siglo XIX, el emperador etíope Menelik conquistó la ciudad somalí de Harar y en 1891 anunció un ambicioso programa de expansión, y tras la I Guerra italo-etíope (1895-1896), en la que derrotó a la Italia colonial, consiguió el reconocimiento de su independencia ante los poderes coloniales. En respuesta a la amenaza expansionista de Menelik, muchos clanes de lo que se convirtió en la Somalilandia británica aceptaron la protección británica. Tras la derrota en la II Guerra italo-etíope contra la Italia de Mussolini y el posicionamiento etíope en la IIGM, Etiopía consiguió a finales de la década de los 1940, para consternación de los somalíes, que la región somalí de Ogadén fuera entregada a Etiopía por el Imperio británico. Tras la independencia de Somalia en 1960, ambos países se enfrentaron en diversas guerras (1964, 1977-1978, 1982) en las que Somalia fue derrotada. La guerra civil somalí de finales de los años ochenta y el colapso de Somalia en 1991 situaron a Etiopía en clara ventaja militar y económica y convirtieron a Somalia en una cuestión de seguridad nacional para Etiopía, interviniendo en los asuntos internos somalíes para promover la paz y la seguridad en Somalia en defensa de sus propios intereses, no siempre coincidentes con los intereses somalíes. Etiopía apoyó a unos actores político-militares en detrimento de otros y mantuvo presencia militar permanente unilateral y no pública y posteriormente dentro de marcos multilaterales (AMISOM, ATMIS y actualmente AUSSOM), hecho que ha sido instrumentalizado por el grupo armado de Somalia al-Shabaab para justificar en parte su campaña armada. A raíz de la crisis entre ambos países como consecuencia del acuerdo firmado en enero de 2024 entre Addis Abeba y la región somalí secesionista de Somalilandia sobre el acceso etíope al mar Rojo, durante el año se llevó a cabo un proceso de diálogo y acercamiento entre Somalia y Etiopía que culminó en diciembre de 2024 con la consecución de un acuerdo entre ambos países con la mediación de Türkiye, pendiente de implementar.

El año 2025 estuvo marcado por una reducción **de la tensión diplomática** entre Etiopía y Somalia tras la firma, el 11 de diciembre de 2024, de la denominada Declaración de Ankara,⁵⁴ mediada por Türkiye, que

50. Melcangi, Alessia, “The Nile at a crossroads: Navigating the GERD dispute as Egypt's floodwaters rise”, *Atlantic Council*, 10 de noviembre de 2025.

51. Ekanem, Solomon, “Ethiopia's mega dam wins U.S. backing for a technical fix amid tensions with Egypt”, *Bussiness Insider Africa*, 20 de octubre de 2025.

52. La presa está situada a 14 km de la frontera sudanesa y mide 1,8 km de ancho y 145 metros de alto. Su construcción se inició en 2011, y ha tenido un coste de 5.000 millones de dólares (mayoritariamente asumido por el erario público, pero una parte de su financiación ha sido a través de la participación de pequeñas aportaciones de millones de etíopes, a través de donaciones y préstamos) y producirá 6.000 MW de electricidad. Al-Jazeera, *Ethiopia inaugurates GERD dam amid downstream tensions with Egypt, Sudan*, 9 de septiembre de 2025, y Ali, Faisal, “From Haile Selassie to crowdfunding, how Ethiopia's GERD dam was born”, *Al-Jazeera*, 9 de septiembre de 2025.

53. Ibid.

54. República de Türkiye – Ministerio de Exteriores, *Ankara Declaration by the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Federal Republic of Somalia facilitated by the Republic of Türkiye*, 11 de diciembre de 2024.

puso fin a la grave crisis provocada por el memorando de entendimiento firmado previamente entre Etiopía y la región secesionista de Somalilandia a inicios de 2024. Sin embargo, pese a la restauración formal de las relaciones bilaterales, en **2025 no se consolidó un proceso de paz plenamente operativo**, sino que tuvo lugar una **fase de contención del conflicto**, con avances limitados en la implementación del acuerdo y numerosos interrogantes sin resolver. El acuerdo de Ankara partía de un equilibrio delicado: Somalia lograba el compromiso explícito de Etiopía con su integridad territorial, mientras que Addis Abeba obtenía el reconocimiento del principio de acceso asegurado al mar bajo soberanía somalí, mediante futuros acuerdos comerciales, arrendamientos o fórmulas similares. Las partes acordaron abrir negociaciones técnicas antes de finales de febrero de 2025, con facilitación turca y un plazo de cuatro meses para alcanzar resultados concretos.

Durante los primeros meses de 2025, se observaron gestos políticos significativos pero esencialmente simbólicos. En enero, los dos países anunciaron la **restauración plena de las relaciones diplomáticas**, y sus líderes mantuvieron contactos bilaterales, incluidos encuentros relacionados con la coordinación de tropas etíopes en la nueva misión de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM), que comenzó formalmente el 1 de enero de 2025. No obstante, **la implementación material del acuerdo avanzó con lentitud**. Aunque se confirmó la apertura de canales técnicos, **no se hicieron públicos avances concretos** sobre el acceso etíope al mar ni sobre proyectos portuarios alternativos que sustituyeran el acuerdo inicial con Somalilandia.⁵⁵ Algunos análisis ya advertían, desde diciembre de 2024, que el acuerdo dejaba deliberadamente ambiguos los mecanismos prácticos, posponiendo las decisiones más sensibles para evitar un colapso prematuro del entendimiento.⁵⁶ Además, otros análisis señalaron en julio que el proceso estaba estancado, ya que no se habían celebrado reuniones desde abril. Según informes de medios somalíes, el tema del reconocimiento de Somalilandia también surgió durante conversaciones anteriores, aunque Etiopía no había respaldado ni rechazado públicamente la idea.⁵⁷ **Un elemento clave fue la exclusión de Somalilandia del proceso**. No hubo contactos oficiales con las autoridades de Hargeisa ni durante las negociaciones de 2024 ni a lo largo de 2025. Esta omisión se mantuvo durante todo el año y generó tensiones latentes, especialmente a partir del reconocimiento de Somalilandia por Israel a finales de 2025, que fue duramente criticado tanto por Somalia como por Eritrea. La falta de un canal de diálogo con Somalilandia implica que el acuerdo entre Etiopía y Somalia **no resolvió el núcleo político del contencioso**, sino que lo congeló temporalmente.

Somalia	
Actores negociadores	Gobierno Federal, líderes de los estados federales y emergentes (Puntlandia, HirShabelle, Galmudug, Jubalandia, Suroeste), movimiento político-militar Ahlu Sunna Wal-Jama'a, líderes de clanes y subclanes, Somalilandia
Terceras partes	ONU, IGAD, Türkiye, UA
Acuerdos relevantes	Hoja de Ruta para poner fin a la transición (2011), Acuerdo de Kampala (2011), Constitución Federal Provisional (2012), Declaración de Mogadiscio sobre el Foro Consultivo Nacional (2015), Acuerdo Electoral sobre Somalia (27 de mayo de 2021)

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra la dictadura de Siad Barre y tres años después consiguió derrocarlo. Desde 1991, se han celebrado más de 15 procesos de paz para tratar de establecer una autoridad central con diferentes propuestas. Cabe destacar los procesos de Addis Abeba (1993), Arta (2000) y Mbagathi (2002-2004). El centralismo del Estado somalí había derivado en un elevado autoritarismo en tiempos de Barre, por lo que las diferentes propuestas pretendían establecer un Estado que no concentrara el poder, fórmula ampliamente rechazada por la sociedad somalí. Sin embargo, algunos clanes y señores de la guerra rechazaron el modelo descentralizado o federal porque representaba una amenaza a su poder. El poder de algunos señores de la guerra que han convertido el conflicto en su modus vivendi, la representatividad y los equilibrios de cuotas de poder para configurar el futuro Gobierno entre los diferentes actores y clanes que componen la estructura social somalí agravados y enfrentados durante la dictadura de Siad Barre y tras años de guerra, la injerencia de Etiopía y Eritrea y la postura errática de la comunidad internacional han dificultado la resolución del conflicto. El ascenso del Islam político como alternativa de poder a través de los tribunales islámicos y la internacionalización del conflicto con la irrupción de combatientes extranjeros en el brazo armado de los tribunales, al-Shabaab, así como la invasión etíope y el papel de EEUU en la lucha contra el terrorismo, han contribuido a dificultar la situación. El Gobierno Federal de Transición, surgido del proceso de paz de Mbagathi (2004), finalizó su andadura en 2012 dando paso al Gobierno Federal. No obstante, las acciones del Gobierno Federal y el Parlamento, marcados por su ineficacia y corrupción, y su renovación electoral han sido motivo de disputa y negociaciones sucesivas entre los estados federados y entre sectores opositores en el seno de los respectivos estados así como entre los diferentes clanes que componen la estructura social del país.

Durante 2025, **las iniciativas de paz y diálogo en Somalia se desarrollaron en un contexto particularmente adverso**, marcado por la reactivación militar de alShabaab, el inicio de la nueva misión de la Unión Africana (AUSSOM) y una profunda polarización política interna en torno a la reforma del sistema electoral.

55. Arab News, Ethiopia and Somalia hold a first round of technical talks in Türkiye toward resolving their dispute, 18 de febrero de 2025.
56. Soylyu, Ragip, "Inside the Turkey-backed Somalia-Ethiopia deal", Middle East Eye, 12 de diciembre de 2024.
57. Horn Daily, Ethiopia-Somalia Sea Access Talks Collapse as Regional Tensions Resurface, 1 de agosto de 2025.

El presidente Mohamud lanzó, sin embargo, una iniciativa política de alcance más amplio. En marzo de 2025, anunció la creación de una **plataforma de diálogo nacional inclusivo**, concebida para alinear a líderes políticos, clanes y sociedad civil frente a alShabaab y reforzar la cohesión interna del Estado. Esta propuesta recibió el respaldo explícito de socios internacionales –incluidos la ONU, la UE y EEUU–, que la consideraron un complemento necesario a la presión militar.⁵⁸ No obstante, la iniciativa no se tradujo en un proceso sostenido ni incorporó a actores armados insurgentes, limitando su impacto.

El principal campo de las iniciativas de diálogo en Somalia durante 2025 fue el conflicto político en torno al modelo electoral. El Gobierno Federal impulsó una transición hacia el principio de “una persona, un voto”, como paso previo a elecciones nacionales previstas para 2026. Esta agenda fue percibida por una parte significativa de la oposición y por varios estados federados –especialmente Puntlandia y Jubalandia– como un intento unilateral de recentralizar el poder. A lo largo del año, se sucedieron intentos intermitentes de diálogo entre Mogadiscio, la oposición organizada en el Somali Salvation Forum y los gobiernos regionales. En abril, se lanzó formalmente el registro de votantes en la capital, lo que el Ejecutivo presentó como un hito hacia la democratización. Sin embargo, este paso acentuó la desconfianza de los actores críticos, que denunciaron la falta de consensos previos y boicotearon varias instancias de diálogo. El Gobierno intentó reconducir la situación convocando el **Foro de Diálogo Nacional** previsto para junio de 2025. La conferencia quedó significativamente deslucida tras el rechazo de Puntlandia, Jubalandia y parte de la oposición, lo que redujo su alcance político y evidenció los límites de la iniciativa.⁵⁹ Además, la persistencia de los enfrentamientos armados entre fuerzas federales y regionales –particularmente en Jubalandia– evidenció el fracaso del diálogo.

Pese a este bloqueo, **sí se produjeron acuerdos parciales** en la segunda mitad del año. En agosto de 2025, el presidente Mohamud alcanzó un entendimiento con un grupo de líderes opositores disidentes del Somali Salvation Forum sobre aspectos clave del proceso electoral, moderando algunas de las reformas más controvertidas, como la elección directa del presidente. Aunque este acuerdo fue presentado como un avance, no logró recomponer el consenso nacional, ya que los

principales actores disidentes continuaron al margen. Importantes figuras de la oposición encuadradas en el Somali Salvation Forum, ajenas al acuerdo, siguieron rechazando las reformas o boicoteando el proceso, alegando motivos de seguridad y políticos, lo que deja incompleta la transición de Somalia al sistema de “una persona, un voto”.⁶⁰

Por otra parte, en 2025 no se registraron negociaciones directas ni indirectas entre el Gobierno Federal de Somalia y AlShabaab, al igual que años anteriores. Las autoridades mantuvieron de forma constante una política de rechazo explícito a cualquier diálogo con el grupo, al que siguieron denominando “Khawarij”,⁶¹ y priorizaron la vía militar. Análisis coinciden en que, pese a los llamamientos ocasionales a la desradicalización, no existieron canales políticos creíbles que involucren a facciones del movimiento insurgente. No obstante, el presidente Hassan Sheikh Mohammad durante una conferencia en Oslo en junio de 2024 remarcó su disposición al diálogo y países como Qatar y Türkiye se han ofrecido reiteradamente a facilitar este espacio.⁶²

Género, paz y seguridad

En 2025 se registraron **avances modestos y desiguales en la aplicación de la agenda de mujeres, paz y seguridad en Somalia**, en un contexto marcado por la intensificación de la inseguridad, la polarización política en torno al proceso electoral y la persistencia de niveles muy elevados de violencia de género. La implementación del **Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2023-2027)** continuó contando con el apoyo de Naciones Unidas –en concreto, de la Misión de Asistencia Transicional de las Naciones Unidas en Somalia (UNTMIS)⁶³ y de ONU Mujeres–, en particular para promover la participación efectiva de las mujeres en los procesos de gobernanza y de revisión constitucional, aunque la representación femenina siguió por debajo del objetivo del 30 % establecido en la legislación electoral y reafirmado durante el proceso de reformas políticas de 2024-2025. A pesar de ser un avance significativo, su ejecución siguió enfrentando barreras como la inseguridad persistente, el desplazamiento forzado y normas sociales conservadoras que limitan la autonomía de las mujeres.⁶⁴ En el ámbito político, agencias de la ONU y socios internacionales apoyaron consultas inclusivas en Mogadiscio y en varios estados

58. Hiraan Online, *International partners back Somali president's push for national dialogue against al-Shabaab*, 7 de abril de 2025.

59. European Union Agency for Asylum, “COI QUERY – Somalia – Major political, security, and humanitarian developments”, *EUAA*, 13 de agosto de 2025, pág.2.

60. International IDEA, “*Somalia reaches deal with opposition defectors on electoral model*”, agosto de 2025.

61. Este concepto es un término histórico e islámico que hoy se usa de forma política y deslegitimadora en contextos como el somalí. Vendría a significar un actor hereje y extremista, con quien negociar sería teológica y políticamente inaceptable, ya que son ajenos al verdadero islam.

62. Cok, Corrado, “*React, rinse, repeat: How Europe can help break Somalia's cycle of conflict*”, *ECFR*, 2 de mayo de 2025.

63. La UNSOM finalizó su mandato el 31 de octubre de 2024 y fue sustituida por la Misión de Asistencia Transicional de las Naciones Unidas en Somalia (UNTMIS), con un mandato inicial de 2 años.

64. UNTMIS, *Somalia / Women Inclusion*, Naciones Unidas, 31 de octubre de 2025.

federados para incorporar a mujeres líderes –entre otras, Ubax Ugaas (en el estado de Galmudug) y Hamdi Adani Amin (en el estado de Hirshabelle), que forman parte de la Somali Women Peace Network–,⁶⁵ organizaciones de la sociedad civil –como Bilan Media– y minorías en los debates sobre el modelo electoral y la reforma constitucional, si bien estas iniciativas se vieron limitadas por el boicot de algunos actores regionales y por la inseguridad, según diversos análisis.⁶⁶

A nivel local, se consolidaron **redes de mujeres mediadoras y constructoras de paz** –principalmente, la Somali Women Peace Network–, incluidas alianzas apoyadas por el Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF) y por programas conjuntos del PNUD y ONU Mujeres, que facilitaron la resolución de conflictos comunitarios y el acompañamiento a víctimas de violencia de género en alrededor de 17 distritos del país. No obstante, la situación de violencia sexual y de género siguió siendo extremadamente grave, especialmente entre mujeres y niñas desplazadas internamente.

Somalia – Somalilandia	
Actores negociadores	Gobierno Federal de Somalia, República de Somalilandia
Terceras partes	Türkiye, Noruega
Acuerdos relevantes	--

Síntesis:
El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra la dictadura de Siad Barre y tres años después consiguió derrocarlo. Desde 1991, se han celebrado más de 15 procesos de paz para tratar de establecer una autoridad central con diferentes propuestas. Cabe destacar los procesos de Addis Abeba (1993), Arta (2000) y Mbagathi (2002-2004). El centralismo del Estado somalí había derivado en un elevado autoritarismo en tiempos de Barre, por lo que las diferentes propuestas pretendían establecer un Estado que no concentrara el poder, fórmula ampliamente rechazada por la sociedad somalí. Sin embargo, algunos clanes y señores de la guerra rechazaron el modelo descentralizado o federal porque representaba una amenaza a su poder. El poder de algunos señores de la guerra que han convertido el conflicto en su modus vivendi, la representatividad y los equilibrios de cuotas de poder para configurar el futuro Gobierno entre los diferentes actores y clanes que componen la estructura social somalí agravados y enfrentados durante la dictadura de Siad Barre y tras años de guerra, la injerencia de Etiopía y Eritrea y la postura errática de la comunidad internacional han dificultado la resolución del conflicto. El ascenso del Islam político como alternativa de poder a través de los tribunales islámicos y la internacionalización

del conflicto con la irrupción de combatientes extranjeros en el brazo armado de los tribunales, al-Shabaab, así como la invasión etíope y el papel de EEUU en la lucha contra el terrorismo, han contribuido a dificultar la situación. El Gobierno Federal de Transición, surgido del proceso de paz de Mbagathi (2004), finalizó su andadura en 2012 dando paso al Gobierno Federal. No obstante, las acciones del Gobierno Federal y el Parlamento, marcados por su ineficacia y corrupción, y su renovación electoral han sido motivo de disputa y negociaciones sucesivas entre los estados federados y entre sectores opositores en el seno de los respectivos estados así como entre los diferentes clanes que componen la estructura social del país.

Durante 2025 el contencioso entre Somalia y Somalilandia no solo **no experimentó avances significativos en términos de diálogo**, sino que entró en una **fase de regresión y ruptura del diálogo**, condicionada por dinámicas regionales adversas y por una creciente confrontación política y territorial en el norte de Somalia. El acuerdo alcanzado el 11 de diciembre de 2024 entre Etiopía y Somalia en Ankara, mediado por Türkiye, constituyó un punto de inflexión para Somalilandia, que se vio formalmente excluida del pacto pese a ser el actor directamente implicado en el origen de la crisis. Las autoridades de Somalilandia reaccionaron con abierta hostilidad al acuerdo de Ankara. Desde Hargeisa se interpretó la declaración conjunta entre Addis Abeba y Mogadiscio como una deslegitimación explícita de la entidad somalilandesa, al reafirmar Etiopía el respeto a la “unidad y la integridad territorial de Somalia”, sin mención alguna a Somalilandia. Analistas y portavoces del Gobierno de Somalilandia denunciaron que el acuerdo pretendía resolver una crisis creada a costa de Somalilandia sin contar con ella, reforzando la narrativa de que Mogadiscio instrumentaliza el diálogo regional para bloquear sus aspiraciones de reconocimiento internacional.⁶⁷ A lo largo de 2025, Somalilandia reforzó en paralelo su retórica soberanista y su aproximación estratégica a Etiopía, subrayando que el memorando de entendimiento firmado en enero de 2024 entre Etiopía y Somalilandia seguía siendo válido desde su perspectiva, con independencia del entendimiento posterior entre Etiopía y Somalia. Esta postura contribuyó a consolidar la percepción de que el acuerdo de Ankara, aunque desescaló el enfrentamiento entre Addis Abeba y Mogadiscio, endureció aún más la posición de Somalilandia.

En el plano bilateral, 2025 estuvo marcado por la **ruptura formal de los escasos canales de diálogo existentes**. En abril de 2025, el Gobierno de Somalilandia **suspendió oficialmente todo diálogo con el Gobierno Federal de Somalia**, tras la histórica visita en abril del primer ministro somalí, Hamza Abdi Barre, a **Las Anod**, territorio

65. UNDP Somalia, *Women trailblazers redefining peace & protection in Somalia*, 7 de septiembre de 2025.
66. ONU Mujeres, *Somalia Country Brief on Women Peace and Security (2025) Based on the Report of the Secretary-General on Women Peace and Security (S/2025/556)*, Naciones Unidas, 2025.
67. Tyson, Kathryn, y Karr, Liam, “Ankara Declaration Reduces Ethiopia-Somalia Tensions but Leaves Unresolved Gaps”, *AEI*, 18 de diciembre de 2024; y Walaaleeye, Maxamuud, “Somaliland Accuses Somalia of Undermining Dialogue Principles, Signals Stronger Ties with Ethiopia”, *The Horn Tribune*, 10 de julio de 2025.

disputado en la región de Sool y epicentro de los enfrentamientos de 2023-2024. Hargeisa calificó la visita de “provocación” y de violación directa de su soberanía, afirmando que anulaba las bases mínimas para cualquier negociación futura.⁶⁸ Esta decisión supuso, de facto, el **congelamiento completo del proceso de diálogo Somalia–Somalilandia**, que ya llevaba años operando de manera intermitente y sin avances sustantivos. El conflicto en Las Anod y el reconocimiento por parte de Mogadiscio de la administración SSCKhaatumo como nueva entidad federal agravaron la ruptura, al ser percibidos por Somalilandia como una estrategia deliberada para socavar su control territorial y su posición negociadora.⁶⁹ A diferencia de etapas anteriores, en 2025 no se registraron iniciativas internacionales para relanzar el diálogo entre Somalia y Somalilandia, y no habían perspectivas claras de reactivación del diálogo a corto plazo. La mediación turca se concentró exclusivamente en la relación Addis Abeba–Mogadiscio, reforzando la sensación de aislamiento político de Somalilandia.

Grandes Lagos y África Central

Chad ⁷⁰	
Actores negociadores	Los 18 grupos armados no firmantes del acuerdo de Doha –que no participaron en el DNIS– formaron el Cadre Permanent de Concertation et de Réflexion (CPCR), entre ellos el FACT y el CCSMR. Gobierno y Comité de Autodefensa de Miski
Terceras partes	Comunidad de Sant’Egidio
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Doha por la Paz y la Participación de los Grupos Político- Militares en el Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano (2022), Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano (2022)
Síntesis: Con frecuencia clasificado como uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, Chad enfrenta un amplio, complejo e interrelacionado abanico de retos y elementos de fragilidad e inestabilidad en las últimas décadas, aunque también es escenario de intentos de diálogo y negociación política. En 2021 murió el presidente Idriss Déby y una Junta Militar suspendió la Constitución, la reemplazó con una carta de transición y la promesa de elecciones libres al cabo de 18 meses, tras la celebración de un diálogo nacional, y nombró a su hijo, Mahamat Déby, nuevo presidente durante la fase de transición. El Consejo Militar de Transición (CMT) se comprometió a promover un diálogo nacional, en el que se pretendía que participaran las diferentes insurgencias activas en el país. En 2022 se celebró un proceso de paz en Doha (Qatar) bajo mediación qatari en el que se alcanzó un acuerdo con 34 de las 52 insurgencias, lo que dio paso, finalmente, a la celebración	

del Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano (DNIS), con la participación en el DNIS de diferentes actores, incluyendo los firmantes del acuerdo de Doha. El proceso de paz de Doha y el DNIS concluyeron con la prolongación del mandato del CMT por otros 24 meses bajo un nuevo Gobierno, calificado de unidad nacional, y la continuidad de la presidencia de Mahamat Déby, elegible en las elecciones de 2024, desoyendo las promesas realizadas a la UA, lo que ha supuesto la perpetuación de la ruptura constitucional iniciada en abril de 2021. Las históricas movilizaciones de octubre de 2022 coincidiendo con el fin de la transición – que había sido prorrogada por el DNIS– fueron fuertemente reprimidas, causando más de un centenar de víctimas mortales, lo que evidenció la deriva autoritaria del Gobierno y el silenciamiento de la oposición política y social. En diciembre de 2023 se celebró el referéndum constitucional que permitió a Déby presentarse y vencer en las elecciones de 2024, poniendo fin a la transición política iniciada en 2021.

Las iniciativas de paz y diálogo en Chad durante el año se desarrollaron en un contexto de creciente cierre del espacio político, consolidación autoritaria del poder del presidente Mahamat Idriss Déby y **reconfiguración de las insurgencias armadas**, tras el fin formal del periodo de transición en 2024. Lejos de avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional inclusivo, el año confirmó la ausencia de un proceso de paz integral en Chad con las diferentes insurgencias, y en su lugar, una dinámica de paz fragmentada, basada en acuerdos locales puntuales y en una gestión securitaria de la oposición política y armada. En este sentido, **permaneció bloqueado el diálogo con los grupos armados insurgentes no firmantes del proceso de Doha de 2022 ni tampoco se produjeron avances en el diálogo con la oposición política y social** (derivado del diálogo nacional de 2022), y solo se avanzó en un acuerdo de ámbito local en la región de Tibesti.

El principal avance en materia de iniciativas de paz fue el **acuerdo firmado en abril de 2025 entre el Gobierno y el Comité de Autodefensa de Miski**, en la región septentrional de **Tibesti**, históricamente conflictiva por el control de los recursos auríferos, en el que participaron personalidades locales como el antiguo ministro Adoum Younousmi y el mediador oficial del Gobierno y antiguo opositor, Saleh Kebzabo. El acuerdo incluyó una amnistía para combatientes y fuerzas de seguridad, la suspensión temporal de las actividades mineras y el compromiso de revisar el reparto de los beneficios del oro.⁷¹ No obstante, el proceso estuvo acompañado de maniobras militares disuasorias, destituciones de altos cargos críticos con la gestión de los recursos y, posteriormente, de la adhesión de nuevos grupos armados menores, lo que alimentó una percepción generalizada de

68. Hiiraan, Prime Minister Barre launches eight major development projects in Las Anod town, 14 de abril de 2025; Somaliland, Tensions Soar as Somaliland Suspends Dialogue with Somalia, 17 de abril de 2025.

69. Véase el capítulo 1 (Conflictos armados) en *Alerta 2026! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2026; e International Crisis Group, Somalia-Somaliland: A Halting Embrace of Dialogue, 6 de agosto de 2020.

70. En el caso de Chad existen dos procesos: en primer lugar, proceso de concertación de la parte de la insurgencia que no firmó el acuerdo de Doha de 2022 facilitada por la Comunidad de Sant’ Egidio, y en segundo lugar, la negociación y acuerdo de paz de Miski (región de Tibesti) entre el Gobierno y el Comité de Autodefensa de Miski.

71. RFI, “Tchad: un accord conclu au Tibesti sur l’exploitation des richesses minières”, 21 de abril de 2025.

fragmentación más que de consolidación de la paz.⁷² En contraste con el acuerdo de Tibesti, **no se produjeron avances en el diálogo con las principales insurgencias chadianas no signatarias del Acuerdo de Doha de 2022**, en particular el Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT), el Conseil de Commandement Militaire pour le Salut de la République (CCMSR) y el Mouvement pour la Paix, la Reconstruction et le Développement (MPRD). Durante 2025, estos grupos mantuvieron una postura abiertamente hostil al Gobierno y descartaron la vía negociadora, denunciando la falta de implementación del acuerdo de Doha y el carácter excluyente del proceso político.⁷³ En octubre, el FACT organizó en Francia un encuentro políticoestratégico con representantes de una veintena de organizaciones rebeldes y de la sociedad civil, con el objetivo de avanzar hacia una plataforma común contra el régimen de Déby. Paralelamente, el CCMSR y el MPRD anunciaron una alianza nortesur, poco habitual en la historia rebelde chadiana, presentada como un intento simbólico de superar clivajes regionales y étnicos, aunque con capacidades militares y territoriales limitadas.⁷⁴ Analistas chadianos, como Remadji Hoinathy,⁷⁵ subrayaron que estas dinámicas reflejan tanto la persistencia de la contestación armada como las dificultades estructurales de los movimientos rebeldes para constituir una amenaza unificada. Además, Chad se ha reforzado militarmente en los últimos años gracias al apoyo de EAU. A diferencia de años anteriores, **no hubo en 2025 nuevas iniciativas de mediación impulsadas por la Comunidad de Sant'Egidio** u otros actores entre el Gobierno y las principales insurgencias. No se registraron encuentros exploratorios en Roma ni contactos públicos con las insurgencias excluidas, en un contexto de creciente desconfianza mutua y de cierre del espacio político interno. Esta ausencia de mediación contrastó con el reagrupamiento de actores rebeldes en el exterior y reforzó la percepción de un bloqueo estructural del proceso de paz nacional.

En el plano interno, el año estuvo marcado por el **deterioro del diálogo político con la oposición civil**. La detención en mayo y la posterior condena en agosto del opositor Succès Masra a 20 años de prisión simbolizaron el endurecimiento del régimen y la criminalización de la disidencia política. Las elecciones legislativas, celebradas a finales de 2024 e inicios de 2025, consolidaron el control del partido gobernante y no generaron espacios de concertación política, lo que podría incrementar el riesgo de que la contestación adopte formas violentas.

El acuerdo de paz en Tibesti supuso un avance local relevante, pero estuvo acompañado de fragmentación armada y de una profunda desconfianza hacia el Estado chadiano

Género, paz y seguridad

En 2025, los avances en la agenda de mujeres, paz y seguridad en Chad siguieron siendo muy limitados. La escasa inclusión de mujeres en los procesos de diálogo previos—Dohay el Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano—no fue corregida, y la representación femenina en las instituciones resultantes de los procesos electorales continuó por debajo del objetivo del 30 %. Aunque organizaciones de mujeres y jóvenes siguieron desempeñando un papel activo en iniciativas locales de cohesión social y prevención de conflictos, sus aportaciones no se tradujeron en reformas políticas ni en mecanismos formales de paz, en un contexto de restricción de libertades y debilitamiento de la sociedad civil.⁷⁶

RCA	
Actores negociadores	Gobierno, grupos armados pertenecientes a la antigua coalición Séléka, milicias antibalaka
Terceras partes	Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación (UA y CEEAC con apoyo de la ONU, CIRGL, Angola, Gabón, Rep. del Congo y Chad), Comunidad de Sant'Egidio, ACCORD, OCI, Grupo de Apoyo Internacional (ONU, UE, entre otros), Centre for Humanitarian Dialogue, China, Rusia, Sudán
Acuerdos relevantes	Pacto republicano para la paz, la reconciliación nacional y la reconstrucción en la RCA (2015), Acuerdo de Cese de Hostilidades (junio de 2017), Hoja de Ruta para la Paz y la Reconciliación Nacional (Libreville, julio de 2017), Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación de Khartoum (Bangui, 6 de febrero de 2019), Hoja de Ruta Conjunta por la Paz en RCA (Luanda, septiembre de 2021)

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, la situación en la República Centroafricana se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Tras las elecciones de 2005, en las que venció François Bozizé y que consolidaron el golpe de Estado perpetrado previamente por éste, surgen diferentes movimientos insurgentes en el norte del país, marginado históricamente y de confesión musulmana, que en diciembre de 2012 forzaron la celebración de negociaciones. En enero de 2013 en Libreville el Gobierno de François Bozizé y la coalición de grupos armados, llamada Séléka, acordaron un Gobierno de transición pero Séléka decidió romper el acuerdo y tomó

72. Ben Mahfoudh, Nadia, "Tchad: de nouveaux groupes rejoignent l'accord de paix de Miski dans le Tibesti", *RFI*, 26 de septiembre de 2025.
73. International Crisis Group, *Chad: Averting the Risk of Posttransition Instability*, ICG, 3 de mayo de 2024.
74. RFI, Tchad: réunis en conclave en France, des groupes rebelles poursuivent leur rapprochement, 27 de octubre de 2025.
75. RFI, Tchad: deux mouvements rebelles se rapprochent pour combattre un pouvoir accusé de corruption et pillage, 25 de octubre de 2025.
76. Peacebuilding Fund, *Partner visit to Chad*, Naciones Unidas, octubre de 2025.

el poder derrocando a Bozizé. No obstante, milicias de autodefensa (“antibalaka”), sectores del Ejército y partidarios de Bozizé se rebelaron contra el Gobierno de Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizada, y en diciembre de 2014 una nueva ofensiva puso fin al Gobierno de Séléka y se configuró un Gobierno de transición liderado por Catherine Samba-Panza. Los líderes regionales, encabezados por el congolés Denis Sassou-Nguesso, facilitaron iniciativas de diálogo en paralelo a la configuración de un proceso de diálogo nacional. El proceso de diálogo nacional culminó en 2015. Algunos de los acuerdos alcanzados fueron implementados, como la celebración de las elecciones en 2015 y 2016 que pusieron fin a la fase de transición. Sin embargo, las elecciones no condujeron a un proceso de paz inclusivo lo que comportó la persistencia de la inseguridad y la violencia. Las diferentes iniciativas regionales confluyeron en un marco negociador denominado Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación de 2016 (con mediación de UA y CEEAC y apoyo de la ONU), que estableció en 2017 la Hoja de Ruta de Libreville, y que contribuyó a alcanzar el Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación de 2019, en fase de implementación. Sin embargo, en diciembre de 2020 los representantes de seis de los grupos armados más poderosos del país, entre los cuales los principales firmantes del acuerdo de paz de 2019 –las facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, una facción del FPRC, el MPC y la UPC– denunciaron el incumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno y se retiraron del proceso y crearon la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC), tras lo cual se produjo un reinicio de las hostilidades en el conjunto del país. En 2021 Angola promovió un proceso de concertación que culminó con la firma de la Hoja de Ruta Conjunta por la Paz en RCA (Hoja de Ruta de Luanda), que implicaba el cese inmediato de las hostilidades y el inicio de negociaciones entre el Gobierno y el CPC. Este diálogo se llevó a cabo con algunos de los grupos armados miembros de la CPC. Desde entonces, hubo un doble proceso de paz (el Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación, y la Hoja de Ruta de Luanda) pero que se unificó en 2023. En paralelo, en marzo de 2022 se celebró un proceso de diálogo nacional impulsado por el Gobierno, el Diálogo Republicano, con la ausencia de la coalición CPC y los principales actores de la oposición política, en fase de implementación.

Durante el año la República Centroafricana (RCA) vivió una situación de violencia crónica y proceso de paz estancado. El Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación de 2019 (APPR) y la Hoja de Ruta de Luanda de 2021 continuaron siendo los marcos formales del proceso, pero su aplicación efectiva siguió profundamente erosionada. El Gobierno mantuvo un discurso oficial de compromiso con la paz, aunque en la práctica priorizó una estrategia de control militar y centralización autoritaria, apoyada en alianzas de seguridad externas, lo que redujo los incentivos para una negociación inclusiva. Los avances puntuales en DDR y la reincorporación de algunos grupos armados coexistieron con la fragmentación insurgente, la debilidad de la justicia transicional y la priorización del control coercitivo frente a la

reconciliación inclusiva. En este sentido, persistieron enfrentamientos intercomunitarios, violencia vinculada a la trashumancia y ataques contra civiles,⁷⁷ especialmente en el noroeste, el este y el sureste del país. Los efectos indirectos del conflicto en Sudán agravaron la inseguridad en Vakaga y HautMbomou. Las operaciones militares conjuntas de las Fuerzas Armadas centroafricanas y sus aliados rusos lograron contener a los grupos armados en grandes núcleos urbanos, pero no eliminaron su capacidad de ataque en el mundo rural.

En la primera mitad del año se produjeron **avances relevantes con la reincorporación formal de los grupos armados 3R (Retorno, Reclamación y Rehabilitación) y UPC (Unión por la Paz en Centroáfrica)** al APPR, tras un acuerdo firmado en abril en N'Djamena con mediación chadiana, dos de las insurgencias más relevantes fuera del acuerdo de paz. Ambos líderes, Oumar Abdelkader (3R) y Ali Darassa (UPC), anunciaron el cese de hostilidades y la disolución simbólica de sus movimientos, lo que permitió el inicio de operaciones de desarme y desmovilización con apoyo de la MINUSCA.⁷⁸ Sin embargo, estos avances tuvieron un alcance limitado, ya que miles de combatientes permanecieron armados y se produjeron incidentes violentos protagonizados por facciones disidentes, especialmente en zonas mineras y corredores de trashumancia.⁷⁹

Uno de los principales obstáculos en 2025 fue la **fragmentación de los grupos armados**. La Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC) dejó de operar como estructura cohesionada, dando paso a facciones locales con agendas económicas propias y escasa capacidad de coordinación. En paralelo, surgieron nuevas alianzas armadas, como la Coalición Militar para la Salvación y Recuperación del Pueblo (CMSPR), liderada por Armel Sayo, que integró excombatientes tanto de Séléka como antibalaka, evidenciando la fluidez y volatilidad del panorama insurgente.⁸⁰ Esta fragmentación dificultó cualquier relanzamiento de negociaciones significativas y favoreció una lógica de acuerdos locales informales y cooptación individual.

En el plano político, **las iniciativas de diálogo entre el Gobierno y la oposición política se vieron subordinadas al calendario electoral**. Durante 2025, el Gobierno avanzó en los preparativos de las elecciones presidenciales, legislativas, regionales y municipales previstas para el 28 de diciembre, mientras la oposición –agrupada en el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución de 2016 (BRDC)– denunció la falta de condiciones equitativas y exigió un diálogo político previo. Aunque en septiembre se

77. ACLED, *Central African Republic: Deadly attacks against ethnic Fulani increase*, 7 de marzo de 2025.

78. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe del Secretario General sobre la RCA*, Naciones Unidas, S/2025/383 de 13 de junio de 2025.

79. *Ibidem*.

80. Corbeau News, *Centrafrique : création d'une nouvelle coalition des groupes armés... la CMSPR*, 19 de noviembre de 2024.

inició formalmente un diálogo entre el Gobierno y el BRDC, este se estancó rápidamente por desacuerdos sobre las modalidades, la mediación y la reforma de las instituciones electorales.⁸¹ El proceso electoral avanzó sin resolver estos desacuerdos, reforzando un clima de estabilidad autoritaria.

Género, paz y seguridad

En 2025, la **Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en la RCA** continuó enfrentando importantes limitaciones, pese a algunos avances a nivel local. No se registró la participación de mujeres negociadoras en los principales espacios formales del proceso de paz, ni una integración sistemática de la perspectiva de género en la aplicación del APPR o en los acuerdos con los grupos armados. Sin embargo, las mujeres desempeñaron un papel relevante en iniciativas locales de reconciliación y cohesión social, especialmente en contextos comunitarios afectados por la violencia intercomunitaria y la trashumancia. Con apoyo del Fondo de Consolidación para la Paz (PBF), el PNUD, ONU Mujeres y la MINUSCA, se fortalecieron los comités locales de paz y reconciliación, con presencia femenina, en regiones del noroeste y sureste del país. Según Naciones Unidas, desde 2021 estas estructuras han contribuido a reducir en torno a un 40% la violencia comunitaria en las zonas de intervención, abordando conflictos relacionados con tierras, jefaturas tradicionales y desplazamientos. En 2025, además, se consolidaron los 11 “círculos de paz”, espacios de diálogo que apoyan el liderazgo de mujeres en la mediación comunitaria. En marzo, el presidente firmó un decreto por el que nombró a 11 nuevos miembros de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Reconciliación, incluidas cuatro mujeres.⁸² No obstante, **la violencia sexual y de género siguió siendo grave y generalizada**, especialmente en zonas afectadas por la presencia de grupos armados, operaciones militares y desplazamientos forzados.

RDC	
Actores negociadores	Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupo armado M23, grupos armados del este del país, oposición política y sociedad civil
Terceras partes	UA, SADC, CIRGL, EAC, UE, ONU, OIF, EEUU, Angola, Qatar, Kenya
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Sun City, Acuerdo de Pretoria y Acuerdo de Luanda (2002); Acuerdo Global e Inclusivo sobre la Transición (2002); Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el CNDP (2009), Acuerdo Marco sobre la Paz, la Seguridad y la Cooperación para RDC y la Región (2013), Acuerdo de Paz Inclusivo y Global en la RDC (2016), Acuerdo de Luanda (2022)

Síntesis:

Las demandas de democratización en los años noventa acabaron en una sucesión de rebeliones culminando con el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila entre 1996 y 1997 contra Mobutu Sese Seko. Posteriormente, se desencadenó la llamada Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003) por la participación de una decena de países de la región y numerosos grupos armados. La firma de un alto el fuego en 1999 y diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno de transición mediante un acuerdo de reparto del poder político. La firma de los acuerdos de paz con la insurgencia no supuso el fin de la violencia en el este del país debido a la presencia de decenas de facciones de grupos no desmovilizados y al papel de Rwanda –que percibe como amenaza la existencia de las FDLR, creadas originalmente por miembros de la comunidad hutu que huyeron de Rwanda tras participar en el genocidio contra la comunidad tutsi y contra miembros de la comunidad hutu ruandesa en 1994, y que son un grupo con bases en RDC y con el que Rwanda no pretende abrir espacios de diálogo. El incumplimiento de los acuerdos de paz del 23 de marzo de 2009 entre el Gobierno y el grupo armado CNDP propició en 2012 la desertión de los militares tutsis del antiguo CNDP integrados en el Ejército congolés, argumentando las amenazas de las FDLR y marginación hacia su comunidad. Esas fuerzas desertoras organizaron una nueva rebelión, llamada Movimiento 23 de Marzo (M23), promovida por Rwanda en 2012, formada por miembros de la comunidad tutsi. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada y parte de sus miembros huyeron a Rwanda y Uganda. A pesar de ello persistió el clima de inestabilidad y violencia, y a finales de 2021 el M23 reinició su ofensiva. RDC ha acusado reiteradamente a Rwanda de apoyar al M23, mientras que Rwanda ha señalado a RDC por continuar su apoyo a las FDLR. En 2022 se activaron dos procesos de diálogo, uno entre el Gobierno de RDC y los grupos armados del este de RDC, incluido el M23, conocido como el proceso de Nairobi; y otro entre los Gobiernos de RDC y Rwanda, conocido como el proceso de Luanda, con mediación de Angola en nombre de la UA. No obstante, persistieron los enfrentamientos a pesar de las iniciativas regionales de diálogo y del establecimiento de operaciones militares regionales (de la EAC y de la SADC) y fracasaron los intentos por consolidar un alto el fuego.

La República Democrática del Congo (RDC) atravesó uno de los años más críticos de la última década,

81. RFI, Centrafrique: le BRDC dénonce un «double-jeu» du gouvernement sur l'accord du dialogue politique, 22 de septiembre de 2025.
 82. Consejo de Seguridad de la ONU, Informe del Secretario General sobre la RCA, op.cit.

con una combinación de **intensificación del conflicto armado en el este, proliferación de iniciativas diplomáticas paralelas y una creciente implicación de actores regionales e internacionales**. Aunque se produjeron avances diplomáticos destacados en el plano interestatal –especialmente entre la RDC y Rwanda–, estos no se tradujeron en una reducción sostenida de la violencia, consolidándose una brecha profunda entre los compromisos diplomáticos y la realidad sobre el terreno. En conjunto, **2025 confirmó el agotamiento de los marcos africanos de mediación (Luanda y Nairobi)** y el desplazamiento del centro de gravedad diplomático hacia actores no africanos, especialmente Qatar y EEUU. Sin embargo, la falta de inclusión del M23 en los acuerdos interestatales, la centralidad de los intereses económicos ligados a los minerales y la persistencia de causas estructurales –gobernanza débil, militarización del territorio y fragmentación armada– limitaron severamente las perspectivas de un proceso de paz creíble.

La toma militar de Goma y Bukavu a principios del año 2025 por parte del M23 –apoyado por Rwanda– evidenció **el fracaso de las iniciativas diplomáticas regionales anteriores para poner fin al conflicto** (impulsadas por la UA y la EAC). Ambas iniciativas diplomáticas iban acompañadas de operaciones militares regionales en apoyo de las Fuerzas Armadas congoleñas (Fuerza Regional de la EAC y SAMIDRC, Fuerza regional de la SADC) junto a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO) para intentar promover un alto el fuego y la separación de las fuerzas contendientes. El fracaso de estas dos operaciones militares junto al descrédito estructural de la MONUSCO –que está llevando a cabo una retirada pactada en fases desde inicios de 2024, y ya ha abandonado Kivu Sur– contribuyó al vacío de poder que el M23 y Rwanda aprovecharon para ampliar su control territorial. Ante esta situación, **Qatar y EEUU iniciaron conversaciones y abrieron canales de diálogo entre Rwanda, RDC y el M23 de cara a detener las hostilidades**. El 18 de marzo de 2025, los presidentes Félix Tshisekedi y Paul Kagame, con la mediación del emir de Qatar, firmaron en Doha una declaración conjunta llamando a un alto el fuego inmediato, constituyendo el primer contacto directo entre ambos mandatarios en tres años. Este gesto marcó un punto de inflexión simbólico tras meses de escalada militar del M23 –apoyado por Rwanda– y abrió la puerta a una mayor implicación de actores extraafricanos en la mediación del conflicto.

Poco después, el 25 de abril, los ministros de Exteriores de ambos países firmaron en Washington una “declaración de principios” bajo los auspicios de EEUU, comprometiéndose a alcanzar un acuerdo de paz antes del 2 de mayo. Sin embargo, el plazo expiró

sin resultados concretos, mientras los enfrentamientos, los desplazamientos masivos de población y la violencia sexual continuaban en Kivu Norte y Kivu Sur. Esta secuencia evidenció, una vez más, la fragilidad de los compromisos diplomáticos en ausencia de mecanismos de verificación efectivos y de la inclusión de los actores armados relevantes. Finalmente, el 27 de junio, los ministros de Exteriores de Rwanda y la RDC firmaron en Washington un acuerdo ante el presidente estadounidense Donald Trump. El pacto incluía tres pilares principales: 1) la retirada progresiva de las tropas ruandesas del territorio congolés; 2) la cooperación en materia de seguridad, mediante la creación de un mecanismo conjunto de coordinación de seguridad en un plazo de 30 días; y 3) el establecimiento de mecanismos de integración económica regional en un plazo de 90 días, estrechamente vinculados a la explotación y comercialización de minerales estratégicos, con participación directa de empresas estadounidenses. En este marco, la RDC debía facilitar el desmantelamiento de las FDLR, mientras que Rwanda se comprometía a retirar sus tropas y poner fin a su apoyo al M23. No obstante, el acuerdo no incluía directamente al M23 –ni a las FDLR–, lo que limitó gravemente su alcance y eficacia.

En julio, **el Gobierno congolés y el M23 firmaron en Doha una declaración de principios para un alto el fuego**, bajo mediación qatarí. A pesar de este avance, la violencia continuó, y las conversaciones posteriores en agosto y octubre no produjeron avances sustantivos. El 7 de noviembre, EEUU anunció que Kinshasa y Kigali comenzaban a elaborar el marco de integración económica regional (acuerdo marco), pero su implementación quedó bloqueada por la falta de puesta en marcha previa del Concept of Operations (CONOPS),⁸³ acordado en Luanda en octubre de 2024 y considerado condición indispensable para la retirada efectiva de fuerzas y la neutralización de las FDLR.

Finalmente, el 4 de diciembre, los presidentes Tshisekedi y Kagame se reunieron en Washington con Trump para ratificar el acuerdo de junio, conocido desde entonces como el Acuerdo de Washington. Sin embargo, este gesto político coincidió con una grave escalada militar en Kivu Sur, evidenciando la desconexión entre diplomacia y conflicto. A los pocos días de la ratificación del acuerdo, centenares de miles de personas huyeron de intensos enfrentamientos en Kivu Sur, especialmente en Kamanyola y posteriormente en Uvira, ciudad estratégica cercana a la triple frontera entre la RDC, Rwanda y Burundi, que acabó cayendo en manos del M23. Aunque el grupo anunció su retirada de Uvira tras la intervención de la mediación estadounidense, los combates continuaron en las localidades circundantes. Alrededor de 100.000 personas huyeron a Burundi,

83. US State Department, *Concept of Operations (CONOPS)*, 27 de junio de 2025.

según ACNUR. En este sentido, diversos análisis coincidieron en señalar que la creciente regionalización del conflicto como consecuencia de la progresiva participación militar de Burundi en apoyo de RDC.

Género, paz y seguridad

En 2025, **la agenda de mujeres, paz y seguridad en la RDC avanzó de forma muy desigual**, con una brecha persistente entre el reconocimiento político del papel de las mujeres y su inclusión efectiva en los procesos de paz. A nivel diplomático y de negociación, no se registró la participación significativa de mujeres como negociadoras ni en el proceso de Doha, ni en las conversaciones entre la RDC y Rwanda auspiciadas por EEUU, ni en los contactos con el M23, reproduciendo una exclusión estructural ya observada en años anteriores. El nombramiento en 2024 de Judith Suminwa Tuluka como primera ministra, presentado por el presidente Tshisekedi como un hito en favor de la igualdad de género, no se tradujo en una integración de la perspectiva de género en las negociaciones en curso ni en la política de seguridad, y su impacto real sobre la dimensión de género del conflicto siguió siendo limitado.⁸⁴ En este sentido, la violencia sexual relacionada con el conflicto alcanzó niveles alarmantes, especialmente en Kivu Norte y Kivu Sur, en el contexto de desplazamientos masivos, ocupaciones territoriales del M23 y enfrentamientos entre múltiples actores armados.⁸⁵ Mujeres y menores siguieron siendo utilizadas como instrumento de guerra, coerción y control territorial.

A nivel regional, se mantuvieron iniciativas relevantes impulsadas por la UA y Naciones Unidas, como el seguimiento del proceso de Swakopmund y los foros regionales de mujeres de la región de los Grandes Lagos, que continuaron abogando por la inclusión de las mujeres en los procesos de primera vía. Sin embargo, estas iniciativas no tuvieron incidencia directa en las negociaciones clave de 2025. Cabe destacar la celebración en octubre de una **cumbre continental en Namibia para conmemorar los 25 años de la Resolución 1325, donde se adoptó la Declaración Windhoek+25**, en la que se reafirmaron los compromisos anteriores del proceso de Swakopmund.⁸⁶

Sudán	
Actores negociadores	Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y Rapid Support Forces (RSF)
Terceras partes	Mecanismo “Quad” o Cuarteto (EEUU, Arabia Saudí, Egipto y EAU), Mecanismo trilateral (ONU, UA e IGAD (Etiopía, Sudán del Sur, Djibouti, Kenya, Uganda)), Suiza, Türkiye, UE
Acuerdos relevantes	Negociaciones de paz en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul: Acuerdo de paz de Darfur (DPA) (2006), Acuerdo de Hoja de Ruta (2016), Declaración de Juba de Medidas de Fomento de la Confianza y la Preparación para la Negociación (2019), Acuerdo de Paz de Juba (2020)

Síntesis:

En el país se mantienen abiertos diferentes conflictos armados (Darfur, Nilo Azul y Kordofán Sur), así como tensiones entre el Gobierno y la oposición, que han supuesto diferentes frentes de negociaciones de paz y desescalada de la violencia. En Darfur, en medio de las conversaciones de paz para resolver el histórico contencioso entre el norte y el sur del país –que acabó con la firma del Comprehensive Peace Agreement (CPA) en el 2005–, diversos grupos armados, principalmente el JEM y el SLA, se rebelaron en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región. En 2006 se alcanzó un acuerdo de paz, el Darfur Peace Agreement (DPA), que sólo incluyó a una facción del SLA, la liderada por Minni Minawi, mientras persistió el conflicto y los intentos frustrados de diálogo, principalmente promovidos por Qatar en el marco del proceso de paz de Doha, al que se fueron sumando los diferentes actores. Por otro lado, en las conocidas como las Dos Áreas (Kordofán Sur y Nilo Azul), la secesión de Sudán del Sur en julio de 2011 y la reconfiguración nacional que supuso para Sudán agravaron las tensiones entre esas regiones fronterizas y el Gobierno sudanés, ya que durante el conflicto armado sudanés ambas regiones habían apoyado a la insurgencia sureña del SPLA. La African Union High Level Panel on Sudan (AUHIP) ha mediado para buscar una resolución pacífica entre las partes (Gobierno y rebelión del SPLM/N) que gira en torno a tres principales ejes en las negociaciones de paz: el modelo de cese al fuego; el tipo de acceso humanitario a las dos áreas; y las características y agenda del Diálogo Nacional. A su vez, a principios de 2014, el entonces presidente sudanés, Omar al-Bashir, hizo un llamamiento al Diálogo Nacional a todos los actores armados y grupos de oposición. La propuesta contó desde sus inicios con la implicación del ex presidente sudafricano Thabo Mbeki y de la AUHIP para promover negociaciones de paz y una transformación democrática. Tras la caída del régimen de al-Bashir en abril de 2019, se fusionaron los diferentes procesos y escenarios de negociación de paz en el país entre el nuevo Gobierno de Transición y los diferentes grupos rebeldes de las Dos Áreas y Darfur, logrando, en octubre de 2020, la firma del Acuerdo de Paz de Juba. Sin embargo, varios grupos armados, entre ellos el SPLM-N al-Hilu (Dos Áreas) y el SLM/A-AW (Darfur) se negaron a la firma del acuerdo de paz, manteniéndose las conversaciones de forma separada. En 2022, y debido a la crisis de gobernanza en el país generada por la llegada

84. Journalists for Human Rights, KINSHASA: Civil society and media call for women's inclusion in DRC peace processes, 18 de junio de 2025.

85. ONU Mujeres, Press briefing by UN Women on the situation of women and girls in the Democratic Republic of Congo, 4 de febrero de 2025.

86. African Union, Windhoek+25 Declaration: “25 Years of 1325, Honoring the Legacy, Advancing the Women, Peace and Security Agenda”, 24 de octubre de 2025.

al poder de la Junta Militar, se abrieron conversaciones entre la Junta y actores políticos y militares para lograr la transición política, que incorporó la revisión del Acuerdo de Paz de Juba. En 2023 las negociaciones se rompieron con el estallido de un nuevo conflicto armado entre las FFAA y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF), dando lugar a nuevas iniciativas de mediación.

Las iniciativas de paz volvieron a ser infructuosas y no lograron contener la violencia en el país durante un año caracterizado por la división de facto del país en dos.

Por un lado, el Ejército (SAF por sus siglas en inglés), tras la recuperación de la capital Jartum en marzo – que había estado en manos de las paramilitares RSF desde el inicio del conflicto– controla el centro, norte y este del país; y por otro, las paramilitares fuerzas de las Rapid Support Forces (RSF por sus siglas en inglés), controlan el sur y el oeste del país tras la toma de El Fasher, capital de Darfur y último bastión del Ejército en el oeste en octubre. El resultado de ambos movimientos fue una división de facto del país, que fue acrecentada con la conformación de dos gobiernos paralelos: uno encabezado por el Ejército – internacionalmente reconocido y con sede en Puerto Sudán–, y otro por las RSF, que ha establecido un gobierno paralelo en Darfur.⁸⁷ En este escenario, en lo alusivo al desempeño de las iniciativas de paz, el año ya arrancó con señales preocupantes. En enero, grupos afines a las RSF celebraron consultas en Nairobi sobre la posible creación de un gobierno paralelo, avivando los temores de fragmentación del Estado. El 22 de febrero, más de 300 representantes firmaron en Nairobi una carta constitutiva –incluidos partidos políticos, organizaciones civiles y el líder del SPLM-N, Abdelaziz al-Hilu– que sentaba las bases de una administración rival en los territorios controlados por las RSF. La medida fue criticada duramente por la ONU, la Unión Africana (UA), EEUU, Arabia Saudí y otros actores, que la consideraron un paso hacia la balcanización del país. Posteriormente, en marzo, mientras las SAF consolidaban el control de la capital, las RSF y sus aliados firmaron un documento constitucional que allanaba el camino para la formación de gobiernos paralelos en sus territorios. El Consejo de Paz y Seguridad de la UA condenó enérgicamente la medida, advirtiendo del riesgo de partición definitiva del país. El 15 de abril, Reino Unido, Francia, Alemania, la UA y la UE convocaron en Londres una conferencia diplomática amplia para intentar unificar los esfuerzos de paz. Sin embargo, estallaron disputas en torno al borrador del comunicado conjunto entre Egipto y Arabia Saudí –que apoyan al Ejército– y Emiratos Árabes Unidos (EAU) –que apoya a las RSF–, lo que impidió alcanzar cualquier acuerdo. La conferencia dejó en evidencia la profundidad de las divisiones entre los mediadores externos y la naturaleza de guerra de representación

La red de mujeres SIHA denunció el estado de la violencia sexual vinculada al conflicto en Sudán

regional que ha adquirido el conflicto. Más tarde, en mayo, EEUU impuso sanciones económicas al gobierno liderado por el Ejército por el supuesto uso de armas químicas. Simultáneamente, el Ejército nombró al civil Kamil Idriss como primer ministro, en un movimiento destinado a ganar legitimidad ante la UA. Las RSF, en cambio, lo rechazaron. En junio, Idriss anunció un gabinete de 22 miembros. Al mismo tiempo, la coalición civil Tasees, alineada con las RSF, continuó negociaciones para constituir su propio gobierno alternativo, el cual se conformó finalmente el 26 de julio encabezado por el líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti”, quien fue nombrando primer ministro. El 30 de agosto, Hemedti juró su cargo como jefe del gobierno paralelo en Nyala, Darfur del Sur, acercando a Sudán a una partición de facto. Paralelamente, el asesor especial estadounidense Massad Boulos –y consuegro de Donald Trump– mantuvo a mediados de agosto conversaciones separadas con ambas partes en Suiza, en un intento de abrir un canal diplomático discreto, sin éxito. Posteriormente, el 12 de septiembre, EEUU, Arabia Saudí, Egipto y EAU –el llamado «Quad» o Cuarteto– anunciaron una hoja de ruta conjunta: una tregua humanitaria de tres meses, seguida de un alto el fuego permanente y una transición de nueve meses hacia un gobierno civil. Ello representó el avance diplomático más sustancial del año, pero la escalada de combates en El Fasher hizo imposible su viabilidad. El 19 de noviembre, el presidente estadounidense

Donald Trump se comprometió públicamente a trabajar para detener las atrocidades en Sudán tras reunirse con el príncipe heredero saudí. El anuncio generó esperanzas de una mayor presión diplomática estadounidense. Sin embargo, el general al Burhan rechazó el 23 de noviembre la propuesta de tregua estadounidense, calificándola de sesgada a favor de las RSF. Un día después, las RSF declararon unilateralmente un alto el fuego de tres meses, que incumplieron de inmediato con nuevas ofensivas alrededor de Babanusa. A finales de año, las tensiones entre Arabia Saudí y EAU se agudizaron, dificultando los esfuerzos de alto el fuego. El año acabó con al Burhan viajando a Egipto y Arabia Saudí para consolidar apoyos regionales, reuniéndose con el enviado Boulos, pero sin lograr detener la violencia.

Género, paz y seguridad

En materia de género, paz y seguridad, durante el año no sé constató ningún elemento significativo en las negociaciones en curso. Sin embargo, sí sé denunció que la perpetración de violencia contra la población civil –mujeres, niñas, hombres y niños– sigue siendo una característica fundamental de la campaña de atrocidades en curso en Sudán. En este sentido, la red de

87. Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2026! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2026.

mujeres SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa), denunció en su informe “Más que números”, el estado de la violencia sexual vinculada al conflicto en Sudán desde el estallido de la guerra en abril de 2023 hasta 2025.⁸⁸ SIHA documentó más de 1.294 casos de violencia sexual vinculada al conflicto contra mujeres y niñas, siendo el 77% casos de violación y, en aquellos casos en los que se dispone de información sobre el perpetrador (808), estos se atribuyeron principalmente a combatientes de las RSF. También se denunció que miles de mujeres y niñas están siendo secuestradas y desaparecidas forzosamente en centros de detención de las RSF ocultos en todo el país, donde son sometidas a esclavitud sexual. Asimismo, se documentaron más de 840 casos de mujeres detenidas por las SAF acusadas de colaborar con las RSF.

Sudán del Sur	
Actores negociadores	Negociaciones de implementación del Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) (2018): Gobierno (SPLM), SPLM/A-in-Opposition (SPLM/A-IO), otros grupos armados (SSOA, SPLM-FD, entre otros), facciones del SPLM-IO (facción Kitgwang liderada por Simon Gatwech Dual y facción dirigida por el general Johnson Olony) Negociaciones de Roma – Nairobi (Iniciativa Tumaini): Gobierno, Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSOG) –antes SSOMA, compuesto por: National Salvation Front (NAS), South Sudan United Front (SSUF), the Real SPLM, South Sudan People’s Patriotic Movement (SSPPM).
Terceras partes	Negociaciones de implementación del Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) (2018): “IGAD Plus” (Sudán, Sudán del Sur, Kenya, Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalia y Uganda), UA (Nigeria, Rwanda, Sudáfrica, Chad y Argelia), China, Rusia, Egipto, Troika (EEUU, Reino Unido y Noruega), UE, ONU, South Sudan Council of Churches Negociaciones de Roma - Nairobi: Comunidad de Sant’Egidio, Kenya
Acuerdos relevantes	Acuerdo de paz (2015), Acuerdo sobre la Cesación de las Hostilidades, la Protección de los Civiles y el Acceso Humanitario (2017), Acuerdo revitalizado sobre la resolución del conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) (2018)
Síntesis: Después de años de conflicto armado que enfrentó al Gobierno central de Sudán y el sur del país, liderado por la guerrilla del SPLM/A, Sudán del Sur se convirtió en Estado independiente en 2011, tras la realización del referéndum previsto en el acuerdo de paz de 2005 (Comprehensive	

Peace Agreement, CPA) facilitado con la mediación de la IGAD. La firma de la paz entre Sudán y Sudán del Sur y la consecución de la independencia no logró, sin embargo, acabar con la conflictividad y la violencia. Sudán del Sur siguió envuelto en una serie de conflictos internos por el control de territorio, ganado y poder político, así como por las prácticas neo-patrimoniales y la corrupción en el seno del Gobierno, que no han permitido lograr la estabilidad y consolidar la paz. Como parte de las negociaciones de paz impulsadas en abril de 2013, el presidente ofreció una amnistía a seis comandantes de grupos rebeldes. Sin embargo, en diciembre de 2013, las tensiones entre las facciones leales al presidente Salva Kiir y las leales al ex vicepresidente Riek Machar, líder del SPLA-in-Opposition (SPLA-IO), dieron paso a una nueva escalada de violencia en diversas regiones del país. En enero de 2014, y a través de la mediación de la IGAD, el Gobierno y el SPLA-IO iniciaron conversaciones de paz en Addis Abeba (Etiopía). Los esfuerzos diplomáticos se encontraron con muchos obstáculos para lograr acuerdos de alto el fuego efectivos, habiendo firmado nueve compromisos diferentes entre diciembre de 2013 y agosto de 2015, de cese de hostilidades y medidas transitorias que fueron sistemáticamente violados, lo cual impidió sentar las bases de una solución política al conflicto. El 17 de agosto de 2015, y tras fuertes presiones internacionales y amenazas de bloqueos y sanciones económicas, las partes firmaron un acuerdo de paz promovido por la IGAD Plus, aunque persistieron los enfrentamientos y el incumplimiento del acuerdo. Posteriormente se han logrado nuevos acuerdos entre las partes, entre los cuales destaca el Acuerdo revitalizado sobre la resolución del conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) (2018). Desde entonces el Gobierno mantiene conversaciones de paz con los grupos no signatarios del R-ARCSS en Roma (entre 2018 y 2024) y posteriormente en Nairobi.

El año 2025 estuvo marcado por una grave crisis política y militar que amenazó con colapsar definitivamente el frágil Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur (R-ARCSS). El acuerdo, que establece un gobierno de transición de unidad nacional basado en el reparto del poder entre el presidente Salva Kiir (SPLM) y el primer vicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), había logrado mantener una relativa estabilidad desde su firma, pero en 2025 el frágil equilibrio se rompió. La crisis cristalizó en torno a tres dinámicas convergentes: las remodelaciones unilaterales de gobierno por parte de Kiir, la violencia armada en el estado de Alto Nilo y, como consecuencia directa, la detención de Machar en marzo.

El año comenzó con cierta esperanza diplomática. **El 20 de enero se reanudaron en Nairobi las conversaciones de paz de la Iniciativa Tumaini**, un proceso mediado por Kenya destinado a incorporar al acuerdo de paz a los grupos opositores no signatarios. Sin embargo, las conversaciones se suspendieron el 20 de febrero sin avances, a petición del propio Gobierno sursudanés. Simultáneamente, el presidente Salva Kiir continuó su pauta de remodelaciones gubernamentales unilaterales –destituyendo a dos vicepresidentes, al jefe de inteligencia y a varios miembros del SPLM-IO– sin

88. SIHA Network, “More than numbers. Report on the State of Violence Against Women and Girls in Sudan - 2023-2025”, diciembre de 2025.

consultar a Machar, lo que incrementó la tensión dentro de la coalición gubernamental. Las tensiones fueron en aumento y el 4 de marzo, una milicia étnica nuer conocida como el Ejército Blanco, vinculada al SPLM-IO de Machar, tomó un puesto del Ejército en Nasir (Alto Nilo), causando la muerte de más de 30 soldados incluido un general. En respuesta, las fuerzas de Kiir, con apoyo de tropas ugandesas, lanzaron ataques aéreos de represalia. La violencia se extendió a los estados de Unidad, Jonglei, Ecuatoria Central y las inmediaciones de la capital Juba, desplazando a al menos 50.000 personas. El momento álgido de la tensión llegó el 26 de marzo, cuando **Kiir ordenó el arresto domiciliario de Machar y de su esposa, Angelina Teny, ministra del Interior, así como de otros altos funcionarios del SPLM-IO**. El partido de Machar calificó la detención de inconstitucional y declaró que el Acuerdo Revitalizado había quedado “derogado”. La comunidad internacional también reaccionó, advirtiendo la UNMISS del riesgo de reanudación del conflicto y la IGAD de la posibilidad de una guerra a gran escala. Asimismo, en abril, el Panel de los Sabios de la Unión Africana visitó Juba con la intención de mediar, pero Kiir se negó a permitirles reunirse con Machar. Tampoco el representante especial de la UE para el Cuerno de África logró el acceso. Entretanto, el SPLM-IO sufrió una oleada de desertiones: más de 3.000 combatientes pasaron al bando de Kiir tras ofensivas conjuntas del Ejército de Sudán del Sur y tropas ugandesas en Ecuatoria Central. Un grupo de miembros del SPLM-IO nombró a Stephen Par Kuol presidente interino del partido, generando una escisión que el gobierno aprovechó para legitimar su nueva composición.

El acuerdo de paz en Sudán del Sur se situó al borde del colapso

En mayo, la IGAD celebró una cumbre extraordinaria sobre Sudán del Sur con participación de la UA, pero sin presencia sursudanesa. El organismo creó un subcomité ministerial para evaluar vías de diálogo inclusivo. Ese mismo mes el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el embargo de armas a Sudán del Sur por un año adicional. En junio, Kiir reconstituyó el comité especial de alto nivel para la aplicación del Acuerdo de Paz, excluyendo a la facción de Machar e incorporando únicamente a la escisión de Par Kuol, lo que el SPLM-IO denunció como un órgano ilegítimo. Los siguientes meses Kiir continuó purgando a funcionarios leales a Machar: en julio destituyó al jefe del Ejército, al subjefe de seguridad y a otros altos cargos; en agosto expulsó del Parlamento a una serie de legisladores del SPLM-IO, incluido el vicepresidente primero interino del movimiento, Oyet Nathaniel Pierino. En respuesta, el SPLM-IO declaró que se había “puesto el último clavo en el ataúd” del Acuerdo Revitalizado.

La tensión aumentó aún más cuando el Gobierno presidido por Kiir presentó, el 11 de septiembre, **cargos**

formales de traición, asesinato y crímenes contra la humanidad contra Machar y otros siete funcionarios de la oposición, todos pertenecientes a la comunidad nuer. El SPLM-IO declaró al Gobierno ilegítimo y prometió buscar un cambio de régimen, instando a sus fuerzas a movilizarse para la guerra. La Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación Reconstituida (RJMEC), encargada de monitorear el cumplimiento del acuerdo de paz, advirtió que el R-ARCSS estaba en riesgo de colapso total. En octubre, el vicepresidente de Sudáfrica, Paul Mashatile, visitó Juba para intentar reactivar el proceso de paz, pero sin resultados concretos. En noviembre, Kiir destituyó a su propio heredero aparente, Benjamin Bol Mel, poniéndolo bajo arresto domiciliario, añadiendo una nueva capa de volatilidad a la política nacional. Finalmente, en diciembre, **el Gobierno anunció su intención de celebrar elecciones antes de diciembre de 2026**, pese a la ausencia de avances en los requisitos fundamentales: la redacción de una nueva constitución y la realización del censo nacional. Nuevamente la facción del SPLM-IO leal a Machar rechazó el anuncio.

El año acabó con todos los intentos por parte de los mediadores para reunirse con Machar bloqueados por Kiir. También el Consejo de Paz y Seguridad de la UA exigió en múltiples ocasiones la liberación inmediata e incondicional de Machar y otros detenidos, sin éxito.

Género, paz y seguridad

A pesar del deterioro general, en materia de género, paz y seguridad, la UNMISS y las organizaciones civiles mantuvieron un trabajo sostenido en el terreno. Entre las iniciativas más destacadas, la UNMISS informó que en mayo se celebró una conferencia de partes interesadas para avanzar en el nombramiento de representantes ante la futura Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Regeneración, con participación de mujeres activistas y organizaciones de derechos humanos. A finales de octubre, la organización de la sociedad civil Community Empowerment for Progress Organization, con el apoyo de ONU-Mujeres, la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación Reconstituida y la UNMISS, impartió formación sobre análisis de conflictos y mediación a 21 mujeres mediadoras que representaban a partes signatarias del Acuerdo Revitalizado. En noviembre, la UNMISS organizó un diálogo de alto nivel presidido por la vicepresidenta Rebecca Nyandeng de Mabior en el que participaron mujeres líderes de las partes signatarias y la sociedad civil, que expresaron su preocupación por la escalada en Alto Nilo y Ecuatoria Occidental, la violencia sexual vinculada al conflicto, el juicio a Machar, el estancamiento del proceso de paz y la falta de voluntad política para aplicar la cuota de participación de mujeres del 35% prevista en el acuerdo de paz.⁸⁹

89. Consejo de Seguridad de la ONU, “La situación en Sudán del Sur. Informe del Secretario General”, S/2025/58, 2 de febrero de 2026.

Sudán – Sudán del Sur	
Actores negociadores	Gobierno de Sudán, Gobierno de Sudán del Sur, comunidades étnicas de la región de Abyei
Terceras partes	IGAD, Programa de Fronteras de la Unión Africana (AUBP), UNISFA, ONU
Acuerdos relevantes	Acuerdo de paz global (CPA) (2005); Acuerdo de cooperación (2012); Acuerdo de delimitación de la frontera compartida (2019)

Síntesis:

El conflicto bélico entre Sudán y su parte meridional, actualmente Sudán del Sur, que duró más de 30 años se caracterizó por una acentuada complejidad cuya naturaleza abordó distintas dimensiones relativas a la cultura y a la historia de ambos países, marcada por dos guerras civiles (1963-1972 y 1983-2005). El Acuerdo de Paz Global (CPA, por sus siglas en inglés) de enero del 2005 estableció la celebración de un referéndum en el sur del país sobre la independencia de esta región. La consulta se celebró en enero de 2011 y, después de una clara victoria de los partidarios del sí, en julio de 2011 Sudán del Sur declaró su independencia convirtiéndose en un nuevo Estado. Sin embargo, la separación de ambos países no puso fin a las desavenencias entre Jartum y Juba debido a la multiplicidad de asuntos pendientes de resolución entre ambos Gobiernos. Entre los principales obstáculos para la estabilidad se encuentra la disputa por el enclave petrolero de Abyei y la delimitación final de la frontera entre ambos Estados así como la falta de acuerdo en torno a la explotación de los recursos petroleros (con yacimientos en Sudán del Sur pero con oleoductos para su exportación en Sudán). Las acusaciones mutuas respecto al apoyo de movimientos insurgentes en el país vecino han contribuido a desestabilizar más la situación y amenazar la convivencia pacífica de ambos países.

Durante el año no se produjeron avances en los mecanismos políticos conjuntos entre Sudán y Sudán del Sur, pero sí se registraron algunos acuerdos a nivel intercomunitario. La vía de diálogo abierta desde hace años entre los Ejecutivos de Sudán y Sudán del Sur estuvo condicionada por el conflicto armado en curso en Sudán y la grave inestabilidad política interna en Sudán del Sur derivada del arresto del vicepresidente Riek Machar. Estos hechos incidieron en que no se celebrase ninguna reunión del Mecanismo Político y de Seguridad Conjunto ni del Comité Conjunto de Supervisión de Abyei durante todo el año, interrumpiendo los canales formales de diálogo bilateral. Tampoco se reunió la Comisión Conjunta de Fronteras, lo que paralizó los avances en demarcación territorial y corredores transfronterizos.

Sin embargo, y en contraste con el bloqueo político de alto nivel, **a nivel comunitario, sí se produjeron avances en relación con diálogos intercomunitarios**, principalmente entre comunidades miseriya y dinka ngok –las dos poblaciones que cohabitan en Abyei.

La misión de la ONU en Abyei, UNISFA, informó que el comité conjunto comunitario de paz celebró 16 sesiones ordinarias y tres especiales en el primer período del año, y 14 ordinarias y tres especiales en el segundo, abordando la coexistencia intercomunitaria, las compensaciones por pérdidas, la presencia de las⁹⁰ RSF y la gestión del mercado de Amiet. El 20 de mayo, UNISFA facilitó una reunión entre el Jefe máximo dinka ngok y el Subjefe máximo miseriya en Todach, donde se comprometieron a coexistir en paz y acordaron mecanismos de indemnización por casos pendientes. Posteriormente, del 30 de mayo al 2 de junio, se reunieron en Todach 165 delegados de ambas comunidades, concluyendo con la firma de un acuerdo sobre los procedimientos de migración inversa. El 26 de julio, un nuevo diálogo en Todach con 42 participantes –incluyendo los máximos líderes de ambas comunidades– en respuesta al ataque registrado en el mercado de Amiet los días 21 y 22 de julio, acordó mecanismos de alerta temprana y reuniones periódicas de seguimiento. Por otro lado, entre comunidades dinka ngok y dinka twic, del 9 al 12 de abril, 60 líderes juveniles dialogaron en Wau (Sudán del Sur) con facilitación de la UNISFA, la UNMISS y otros socios, firmando un acuerdo de coexistencia pacífica que incluía el cese de hostilidades, la reapertura de rutas y la lucha contra la desinformación.

Finalmente resulta pertinente resaltar que la misión de la ONU en Sudán del Sur, UNMISS, informó que entre el 7 y el 14 de noviembre tuvo lugar en Malakal (estado de Alto Nilo), la Conferencia Episcopal Católica de Sudán y Sudán del Sur, que representó el primer encuentro de obispos de ambos países. En la reunión, los líderes religiosos se comprometieron a reforzar el diálogo, la confianza y la cooperación entre las diferentes etnias y corrientes políticas.⁹¹

Género, paz y seguridad

Durante el año se registraron algunos avances en los diálogos intercomunitarios en materia de género, paz y seguridad. Del 3 al 5 de junio, la UNISFA organizó en Todach una conferencia conjunta de mujeres miseriyas y dinkas ngoks, congregando a 132 mujeres para tratar su participación en los mecanismos de paz y seguridad y el estado de derecho. El resultado fue la creación de un comité conjunto de mujeres, con un comunicado conjunto firmado por las participantes. Asimismo, entre el 26 y 27 de junio, la UNISFA y la UNMISS organizaron en Wau una reunión de sociedad civil que reunió a 40 mujeres dinkas ngoks y dinkas twics, que también crearon un comité conjunto de mujeres por la paz como parte del proceso de reconciliación entre ambas comunidades.⁹² Sin embargo, y en contraste con

90. Véase los informes del Consejo de Seguridad de la ONU, “La situación en Abyei Informe del Secretario General”, S/2025/269, 1 de mayo de 2025; “La situación en Abyei Informe del Secretario General”, S/2025/649, 15 de octubre de 2025; “La situación en Abyei Informe del Secretario General”, S/2025/58, 2 de febrero de 2026.

91. Consejo de Seguridad de la ONU, “La situación en Sudán del Sur. Informe del Secretario General”, S/2025/58, 2 de febrero de 2026.

92. Consejo de Seguridad de la ONU, “La situación en Abyei Informe del Secretario General”, S/2025/649, 15 de octubre de 2025.

estas iniciativas, los espacios de diálogo político formal presentaron una participación femenina muy escasa: el comité conjunto comunitario de paz contó con solo dos mujeres sobre 28 representantes, y la reunión de líderes del 20 de mayo en Todach estuvo compuesta exclusivamente por hombres.

Magreb – Norte de África

Libia	
Actores negociadores	Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN), Consejo Presidencial, Alto Consejo de Estado, Cámara de Representantes (CdR), LNA o ALAF
Terceras partes	ONU, Cuarteto (ONU, Liga Árabe, UA, UE), Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU, Holanda, Suiza, Türkiye, Egipto, Argelia, Marruecos, Túnez (Proceso de Berlín)
Acuerdos relevantes	Acuerdo Político de Libia o Acuerdo de Skhirat (2015), Acuerdo de cese el fuego permanente (2020)

Síntesis:
Después de la caída del régimen de Muamar Gaddafi en 2011, Libia ha vivido un proceso de transición con múltiples desafíos políticos, económicos, sociales, institucionales y de seguridad, en un contexto caracterizado por la presencia de numerosos actores armados y la intervención y proyección de intereses de múltiples actores foráneos. Desde 2014, el país norteafricano ha sido escenario de una creciente violencia y convulsión política, que derivó en la conformación de dos grandes polos de poder. Ante esta evolución se han activado iniciativas de mediación lideradas por la ONU que han intentado buscar una salida a la crisis en un proceso no exento de obstáculos debido a las disputas de legitimidad, la diversidad de actores implicados, los múltiples intereses en juego y el persistente clima de violencia en el país, entre otros factores. A finales de 2015, bajo los auspicios de la ONU, se firmó el Acuerdo Político de Libia o Acuerdo de Skhirat, en medio de un clima de persistentes divisiones y escepticismo por las previsibles dificultades para su implementación. En octubre de 2017, Naciones Unidas presentó un nuevo plan para reactivar la transición política y facilitar la implementación del Acuerdo Político de Libia. En el marco del denominado Proceso de Berlín –iniciado en 2019 y en el que participan una docena de países, además de la ONU, Liga Árabe, la UE y la UA–, en 2020 se pusieron en marcha negociaciones intra-libias en torno a tres componentes: de seguridad (a cargo de la Comisión Militar Conjunta 5+5), político (en manos del Libyan Political Dialogue Forum o LPDF) y económico; y se activó un Comité Internacional de Seguimiento. A finales de 2020, se oficializó un acuerdo de cese el fuego permanente y se anunció una hoja de ruta que derivó en la conformación de un gobierno de unidad y que preveía la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias en diciembre de 2021. Los comicios no se celebraron, en un contexto de divisiones y luchas de poder que motivó la conformación, nuevamente, de dos gobiernos paralelos, abriendo una nueva etapa de incertidumbre en el país.

Durante 2025 persistió la fractura política e institucional en Libia en paralelo a hechos de violencia que – pese a ser de baja intensidad desde el alto el fuego de 2020– subrayaron la fragilidad de la situación y los retos a la hora de abordar el conflicto político y armado.⁹³ Los principales polos de poder continuaron girando en torno al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) internacionalmente reconocido en el oeste y liderado por el primer ministro Abdul Hamid Mohamed Dbeibah, y el Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN) en el este y liderado por el primer ministro Osama Hamad y apoyado por el comandante (líder del grupo armado Ejército Nacional Libio), Khalifa Haftar. Naciones Unidas siguió siendo el actor que jugó un papel más destacado en las iniciativas de mediación, principalmente a través de su misión de apoyo en el país, la UNSMIL (por sus siglas en inglés) y de la representante del secretario general de la ONU para Libia. En enero de 2025, este cargo fue asumido por la ex ministra de Asuntos Exteriores de Ghana, **Hanna Tetteh, quien promovió una serie de iniciativas para intentar desbloquear el proceso político** –afectado, entre otros factores, por la postergación indefinida de las elecciones generales desde 2021. **Pese al conjunto de procesos que se pusieron en marcha en 2025, al finalizar el año persistía el bloqueo.**

En diciembre de 2024, la UNSMIL –entonces liderada por la representante en funciones del secretario general de la ONU, la diplomática estadounidense Staphanie Koury– había anunciado que para intentar sortear los obstáculos y avanzar en un acuerdo político, se establecería un comité técnico de personas expertas libias que identificarían alternativas para abordar algunos de los principales temas en disputa. Así, en febrero de 2025 se anunció la conformación de un Comité Asesor, cuyos integrantes fueron seleccionados por su conocimiento de temas constitucionales, legales y electorales, su habilidad para alcanzar compromisos y su comprensión de los desafíos de Libia, entre otros criterios. La UNSMIL subrayó que el establecimiento del comité era necesario ante el escenario de profundas divisiones y parálisis política y la creciente insatisfacción con el statu quo por parte de la población, frustrada también por el deterioro de las condiciones económicas.

Integrado por 20 personalidades, entre ellas un 35% de mujeres,⁹⁴ el Comité Asesor celebró numerosas reuniones de trabajo en los tres meses siguientes, incluyendo con otros actores que habían estado implicados en conversaciones previas para abordar el tema electoral –como el comité 6+6, integrado por representantes de los dos principales polos de poder en el país. En mayo, **el Comité Asesor completó su mandato y presentó sus recomendaciones en un informe que identificó y analizó cuatro posibles escenarios para poner fin a la fase de transición:** (1) celebrar elecciones

93. Véase el resumen sobre Libia en el capítulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2026! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2026.

94. UNSMIL, *UNSMIL announces the establishment of the Advisory Committee*, Press Release, 4 de febrero de 2025; Libya Herald, *UNSMIL'S Advisory Committee completes its mandate and submits final report*, 7 de mayo de 2025.

presidenciales y legislativas simultáneamente, (2) llevar a cabo primero los comicios legislativos seguido de la adopción de una Constitución permanente, (3) adoptar una Constitución permanente antes de las elecciones, (4) establecer un comité de diálogo político, basado en el Acuerdo Político de Libia (2017) para finalizar las leyes electorales, la autoridad ejecutiva y el texto constitucional.⁹⁵ El proceso recibió algunas críticas – entre ellas, que todas las opciones consideraban la participación de instituciones desacreditadas, como el Parlamento (elegido en 2014) o el Consejo de Estado Superior (elegido en 2012)— y evidenciaron una cierta desconfianza a que la ONU consiguiera impulsar un proceso sustantivo tras tantos años de intentos.⁹⁶

El informe del Comité Asesor dio paso a una serie de contactos con diversos actores de la sociedad libia. En paralelo, la UNSMIL y Alemania promovieron la **celebración de una nueva reunión del Comité Internacional de Seguimiento del Proceso de Berlín** para intentar coordinar a los actores exteriores implicados en el proceso libio. El encuentro, que tuvo lugar en Berlín en junio, fue el primero de carácter plenario desde 2021 y reunió a 19 Estados y tres organizaciones regionales que reiteraron su compromiso a apoyar el proceso político en el país norteafricano.⁹⁷ La posición de los actores internacionales es relevante ya que, hasta ahora, la decisión de terceros Estados de interactuar con uno o los dos bandos y de priorizar sus intereses por sobre la diplomacia colectiva ha contribuido a afianzar el statu quo y dificultar las perspectivas de una salida política a la crisis. En este contexto, y basándose en las recomendaciones del Comité Asesor y el diálogo sobre la propuesta con otros actores, **la UNSMIL y Tetteh presentaron una nueva hoja de ruta para ser implementada en un plazo de entre 12 y 18 meses**. La iniciativa se articuló en torno a tres pilares: la adopción de un marco electoral viable para la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias, la unificación de instituciones bajo un nuevo gobierno de unidad y un diálogo estructurado que facilite una amplia participación y aborde temas críticos. La hoja de ruta fue recibida con escepticismo por sectores de la sociedad libia y cuestionada por algunos actores de poder, como el general Haftar, quien optó por desacreditar la iniciativa de la ONU y promover la búsqueda de salidas alternativas para abordar la crisis en el país.

Al finalizar el año, no se había conseguido avanzar en los dos primeros pilares de la hoja de ruta. Las partes continuaban divididas sobre el marco legal a aplicar en las elecciones y la comisión encargada de organizarlas, así como sobre la formación de un gobierno unificado. Adicionalmente, instituciones políticas libias

presentaron planes alternativos al de la ONU, lo que contribuyó a una sensación de confusión. Pese a ello, **a mediados de diciembre se decidió avanzar en el tercer pilar de la hoja de ruta y se convocó la primera sesión del llamado “Diálogo Estructurado”**. Integrado por 120 personas –40 de ellas mujeres, equivalentes al 35% del total–, fue concebido como un espacio inclusivo de consultas –no como un ente decisorio– para avanzar en consensos en cuatro ámbitos clave (gobernanza, seguridad, economía, y reconciliación y derechos humanos) y pavimentar el camino a las elecciones.⁹⁸ El hecho de que fuera un espacio de diálogo celebrado en la propia Libia fue puesto en valor por algunos análisis, pese al escepticismo de otros sectores. Entre ellos, algunos que subrayan que la transición política de Libia ha sido obstaculizada repetidamente por élites, milicias y otros actores que se benefician del statu quo.

Cabe destacar que en octubre el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la UNSMIL por un año más tras un informe presentado por el secretario general que realizó una revisión estratégica de la misión. Entre ellas, que la UNSMIL priorice el apoyo a la solución política en Libia, y que lidere y apoye a los grupos de trabajo establecidos en el Proceso de Berlín, el marco negociador que desembocó en el alto el fuego vigente. Otra de las recomendaciones fue la de racionalizar la implicación de la misión en el ámbito de la seguridad, pasando de la aplicación del alto el fuego al fomento de la confianza y la reunificación de las instituciones militares y de seguridad. Asimismo, cabe mencionar que durante el año Türkiye medió ante algunos episodios de violencia entre grupos rivales en Trípoli para evitar una escalada.

Género, paz y seguridad

Tal y como se ha mencionado, **en las iniciativas impulsadas durante el año por la ONU las mujeres libias tuvieron una representación de 35%**. Así fue en el Comité Asesor y luego en el Diálogo Estructurado. En este último espacio, las 40 mujeres participantes decidieron organizarse en un grupo que denominaron Libyan Women Caucus con la intención de asegurar que las perspectivas, prioridades y demandas de las mujeres fueran incorporadas de manera sustantiva. En los meses previos a la puesta en marcha del Diálogo Estructurado, mujeres libias de diversas regiones y también algunas que viven fuera del país participaron en consultas facilitadas por la UNSMIL con la intención de identificar algunas de sus prioridades, que se recogieron en la “Libyan Women’s Charter” (diciembre de 2025).⁹⁹ El texto recoge reflexiones y medidas identificadas en

95. UNSMIL, *UNSMIL shares Advisory Committee recommendations, prepares for public consultation*, Press Release, 20 de mayo de 2025.

96. Mustafa Fetoury, *Is the UN helping or hindering a solution to the Libyan crisis?*, The New Arab, 28 de mayo de 2025; Lawyers for Justice in Libya, *New plan, same mistakes? Four priorities for UNSMIL’s Advisory Committee to advance elections*, 24 de febrero de 2025.

97. Security Council Report, *Libya: August 2025 Monthly Forecast*, 30 de julio de 2025.

98. UNSMIL, *Structured Dialogue*.

99. UNSMIL, *Libyan Women’s Charter*, diciembre de 2025.

documentos y procesos previos, incluyendo algunas de mujeres libias que participaron en el Libyan Dialogue Political Forum (LPDF). Entre otras demandas, la Libyan Women's Charter plantea el establecimiento de mecanismos para asegurar la participación significativa de mujeres en cargos políticos y ejecutivos, elecciones e instituciones de seguridad –con una representación mínima de 35%–, entre otros ámbitos, además del establecimiento de un nuevo gobierno unificado y una revisión constitucional. En 2025 el liderazgo de la UNSMIL estuvo ocupado íntegramente por mujeres y tres mujeres en altos cargos diplomáticos de la ONU –Hanna Tetteh, Stephanie Koury y Rosemary Di Carlo (subsecretaria para Asuntos Políticos) desempeñaron un papel destacado en el acompañamiento al proceso libio.

Marruecos – Sáhara Occidental	
Actores negociadores	Marruecos, Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (POLISARIO)
Terceras partes	ONU, Argelia, Mauritania, Grupo de Amigos del Sáhara (Francia, EEUU, España, Reino Unido y Rusia)
Acuerdos relevantes	Acuerdo de cese el fuego (1991)
Síntesis:	
Los intentos de mediación y búsqueda de una salida negociada al conflicto del Sáhara Occidental derivaron en un acuerdo de cese el fuego en 1991. Desde entonces, y pese a la existencia de un marco formal de negociaciones bajo los auspicios de la ONU, el proceso de paz sobre el Sáhara Occidental no ha fructificado. Las sucesivas propuestas y numerosas rondas de negociaciones no han suscitado un acuerdo entre las partes, que mantienen sus respectivas líneas rojas: Marruecos insiste en su reclamo sobre el territorio y sólo está dispuesto a admitir un estatus de autonomía, mientras que el Frente POLISARIO reivindica la necesidad de llevar a cabo un referéndum que incluya la opción de independencia. Las negociaciones sobre el Sáhara Occidental –reconocido como un territorio pendiente de descolonizar– se han visto determinadas por la asimetría de los actores en disputa, la incapacidad de la ONU para poner en marcha una consulta sobre el futuro del territorio, la rivalidad regional entre Marruecos y Argelia –apoyo clave para el POLISARIO–, y por el respaldo a Rabat por parte de actores internacionales clave, como EEUU o Francia, lo que ha determinado, en la práctica, una prevalencia de las tesis marroquíes en la aproximación al conflicto. A finales de 2020, tras incidentes con Marruecos en la zona de Guerguerat, el Frente POLISARIO dio por finalizado el acuerdo de cese el fuego.	

En 2025 continuaron las iniciativas diplomáticas para intentar reactivar las negociaciones sobre el Sáhara Occidental, sin que se consiguiera restablecer un diálogo entre Marruecos y el Frente POLISARIO. La principal novedad del periodo fue el apoyo internacional más contundente a las tesis marroquíes, que se materializó en el respaldo de diversos países y en la aprobación de una resolución de Naciones Unidas

que, en octubre, reconoció expresamente el plan de autonomía de Rabat como base para las negociaciones para abordar el contencioso. Como en años previos, Naciones Unidas tuvo un rol destacado en los esfuerzos de mediación. **Coincidiendo con los 50 años desde el inicio del conflicto y en un escenario de hostilidades de baja intensidad, la actividad del enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, se concentró en los primeros meses del año en intentar reactivar las negociaciones para una salida política y restablecer el alto el fuego** (vigente entre 1991 y 2020). El diplomático realizó nuevas rondas de viajes a la región y se reunió con actores clave (en marzo y septiembre). En paralelo, EEUU se implicó de manera más activa en el abordaje del conflicto, desde una posición abiertamente alineada con los intereses de Marruecos. El Gobierno de Donald Trump –quien en su primer mandato (2017-2021) reconoció el Sáhara Occidental como territorio marroquí– reiteró públicamente su respaldo al plan de autonomía marroquí. **Washington también intensificó sus actividades políticas y diplomáticas, incrementando sus presiones a Argelia para convencer al Frente POLISARIO de aceptar el plan marroquí e insistiendo en la necesidad de reducir tanto el contingente como el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).** Tanto en EEUU como en Marruecos, algunos sectores hicieron llamamientos a dismantelar completamente la misión y a declarar al Frente POLISARIO como grupo terrorista. A mediados de 2025 se registró un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes de EEUU con el objetivo de criminalizar al Frente POLISARIO, a través de su designación como “organización terrorista extranjera” (FTO, según las siglas en inglés).

El ambiente internacional más favorable a los intereses de Marruecos se evidenció a lo largo del año en el apoyo explícito de nuevos países –entre ellos Reino Unido, Kenya, Portugal o Guatemala– al plan de autonomía presentado por Rabat en abril de 2007 y que excluye la opción de independencia saharauí reivindicada por el Frente POLISARIO. El respaldo de estos Estados a Rabat se sumó así al de otros actores internacionales relevantes en últimos años, incluyendo países europeos como Francia –que en 2024 declaró que el plan de autonomía marroquí era “la única vía” para alcanzar una solución política al conflicto en torno al Sáhara Occidental–, España –que en 2022 consideró que la iniciativa de Rabat era “la opción más seria, creíble y realista” para resolver el contencioso – o Alemania – también en 2022. En la práctica, cuatro de los cinco países que integran el llamado Grupo de Amigos del Sáhara Occidental –EEUU, España, Francia y Reino Unido– se han alineado abiertamente con las posiciones de Marruecos, con la excepción de Rusia.

En este escenario, **la aprobación de la resolución 2797 por parte del Consejo de Seguridad de la ONU marcó**

un nuevo hito en la historia del conflicto. El texto de la resolución fue elaborado por EEUU y aprobado por 11 votos a favor y ninguno en contra, con las abstenciones de China, Pakistán y Rusia y con la ausencia de Argelia – principal respaldo internacional del Frente POLISARIO–, que no participó en la votación. El borrador de la resolución presentado por Washington había planteado inicialmente extender la vigencia de la MINURSO por tan solo tres meses y demandaba a la ONU elaborar recomendaciones para transformar o poner fin a la misión. Finalmente, después de intensas negociaciones, se aprobó la extensión habitual de la MINURSO por el plazo de un año. Sin embargo, el elemento más novedoso y relevante de la resolución 2797 es que **insta explícitamente a que las partes entablen negociaciones sobre el futuro del Sáhara Occidental “tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución definitiva y aceptable”.** Adicionalmente, el texto reconoce que **“una verdadera autonomía podría ser el resultado más factible”.**¹⁰⁰ La alusión expresa al plan presentado por Rabat hace casi 20 años contrastó con la omisión de las posiciones defendidas por el Frente POLISARIO, que en octubre había presentado una propuesta revisada y ampliada. Según trascendió, esta nueva iniciativa del grupo saharauí planteaba incluir un plan de autonomía similar al presentado por Marruecos como una de las alternativas en un referéndum en el que la población saharauí también tuviera la opción de elegir la independencia.¹⁰¹ Argelia, que participó en las negociaciones sobre el borrador de la resolución, declaró que el texto no reflejaba las legítimas aspiraciones del pueblo saharauí. Algunos análisis enfatizaron que Argel había decidido ausentarse de la votación porque un voto positivo habría sido interpretado como un respaldo al plan de autonomía y uno negativo, como un rechazo a la ampliación del mandato de la MINURSO, que en su mandato entraña la posibilidad de un referéndum. Votar abiertamente en contra de la resolución también habría enfrentado a Argelia con el promotor del texto, EEUU, poniendo en riesgo la relativa aproximación en las relaciones bilaterales desde el retorno al poder de Donald Trump.¹⁰²

En los meses siguientes el enviado especial de la ONU subrayó que el plan marroquí era solo un marco y no anticipaba necesariamente el resultado de las negociaciones. En este contexto, Naciones Unidas instó a las partes a retornar al diálogo y

La aprobación de la resolución 2797 de Naciones Unidas marcó un punto de inflexión al reconocer el plan de autonomía de Marruecos como base para las negociaciones sobre el futuro del Sáhara Occidental

EEUU también presionó e insistió en la reanudación de negociaciones. Marruecos anunció que estaba actualizando y ampliando su propuesta, y trascendió que Rabat estaba tomando como referencia –entre otros modelos– el del régimen de autonomías español. Al finalizar el año aún no se conocían detalles de esta propuesta ampliada. El rey de Marruecos agradeció públicamente a los países que apoyaron su aproximación y consideró que la resolución representaba un punto de inflexión en la consolidación de la identidad marroquí del Sáhara. En paralelo, el reino marroquí continuó estrechando sus relaciones con Washington, tanto a nivel diplomático como en el económico y militar, incluyendo millonarios contratos para la compra de armamento. En cuanto al Frente POLISARIO, desde antes y, sobre todo después de la aprobación de la resolución 2797 de Naciones Unidas, se informó de diferencias y debates internos sobre la estrategia a seguir. El grupo saharauí enfrentaba el dilema entre ser acusado de espóiler o aceptar negociar pese a los nuevos términos establecidos, en un contexto de creciente aislamiento internacional. Formalmente, el grupo celebró la extensión de la MINURSO y

reiteró su disposición a participar constructivamente en un proceso liderado por la ONU, pero rechazó participar en un proceso político que legitimara la ocupación militar marroquí del Sáhara Occidental y privara a la población saharauí de su derecho inalienable a la autodeterminación.

En noviembre, sectores partidarios de no continuar con las negociaciones se reunieron en el campo de refugiados de Tindouf y demandaron un cambio de liderazgo. Algunos análisis alertaron también sobre la creciente frustración en sectores de la juventud refugiada saharauí, que en el actual escenario han hecho llamamientos a intensificar la lucha armada.¹⁰³ Desde una perspectiva de derechos humanos y derecho internacional, se señalaron críticas a la resolución 2797 por apoyar un plan que no contempla la opción de independencia, ni prevé reparaciones y que no garantiza que la población saharauí pueda decidir libremente sobre su estatus político. Organizaciones como Human Rights Watch subrayaron estos aspectos y recordaron que una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) –principal órgano de justicia de la ONU– reafirmó ya en 1975 el derecho a la autodeterminación de la población saharauí.¹⁰⁴

100. Consejo de Seguridad de la ONU, Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, S/RES/2795(2025), Párrafo 3.

101. Security Council Report, “Western Sahara: Vote on a Draft Resolution Renewing MINURSO’s Mandate”, What’s in Blue, 31 de octubre de 2025.

102. Arab Center for Research and Policy Studies, What Next for the Western Sahara? The Repercussions of Security Council Resolution 2797, Series: Situation Assessment, 13 de noviembre de 2025.

103. International Crisis Group, A Window for Diplomacy in Western Sahara, Briefing no.96, Middle East & North Africa, 20 de octubre de 2026.

104. Human Rights Watch, UN: Western Sahara Peoples’ Self-Determination at Risk, HRW Report, 25 de marzo de 2026.

